

ALIANZAS FATÍDICAS

Un caballo decidió vengarse de cierto venado que lo había ofendido y emprendió la persecución de su enemigo. Pronto se dio cuenta de que solo no podría alcanzarlo y, entonces, pidió ayuda a un cazador. El cazador accedió, pero le dijo: «Si deseas dar caza al ciervo debes permitirme colocarte este hierro entre las mandíbulas, para poderte guiar con estas riendas, y dejar que te coloque esta silla sobre el lomo para poderte cabalgar estable mientras perseguimos al enemigo». El caballo accedió a las condiciones y el cazador se apresuró a ensillarlo y embridarlo. Luego, con la ayuda del cazador, el caballo no tardó en vencer al ciervo. Entonces le dijo al cazador: «Ahora apéate de mí y quítame esos arreos del hocico y el lomo». «No tan rápido, amigo — respondió el cazador—. Ahora te tengo tomado por la brida y las espuelas y prefiero quedarme contigo como regalo.»

«El caballo, el ciervo y el cazador», *Fábulas de Esopo*

El 30 de octubre de 1922, Benito Mussolini llegó a Roma a las 10:55 a bordo de un coche cama procedente de Milán en el que había pernoctado.¹ El rey italiano lo había invitado a la capital para jurar el cargo de primer ministro del país y constituir un nuevo gabinete. Acompañado por un reducido grupo de guardias, Mussolini hizo un alto en el Hotel Savoia primero y, luego, vestido con un traje chaqueta negro, una camisa negra y un sombrero hongo también negro, se dirigió a pie triunfante hasta el palacio real del Quirinal. En Roma corrían rumores de descontento social. Bandas de fascistas, muchos de ellos con uniformes diferentes, rondaban por las

calles de la ciudad. Mussolini, consciente de la fuerza del espectáculo, entró con paso decidido en el palacio residencial de suelos marmóreos del rey y lo saludó con un: «Señor, disculpe mi atuendo. Vengo del campo de batalla».²

Aquello marcó el inicio de la legendaria Marcha sobre Roma de Mussolini. La imagen de masas de «camisas negras» cruzando el río Rubicón para arrebatar el poder al Gobierno liberal italiano se convirtió en el canon fascista, recreado en los días festivos nacionales y recogido en los libros de texto de las escuelas durante las décadas de 1920 y 1930. Mussolini fue una pieza clave en la construcción de la leyenda. En la última parada de tren antes de llegar a Roma aquel día se había planteado apearse del convoy para entrar en la ciudad a caballo, rodeado de su guardia.³ Y aunque finalmente descartó el plan, después hizo cuanto pudo por fomentar la leyenda de su ascenso al poder como, en sus propias palabras, una «revolución» y un «acto de insurrección» que había inaugurado una nueva época fascista.⁴

La realidad era más prosaica. El grueso de los «camisas negras» de Mussolini, la mayoría de ellos mal alimentados y desarmados, llegaron a la ciudad después de que el rey invitara a su líder a convertirse en primer ministro. Los pelotones de fascistas que rodeaban Roma representaban una amenaza, pero las maquinaciones de Mussolini para tomar las riendas del Estado no tuvieron nada de revolución. Utilizó los 35 escaños parlamentarios de su partido (de un total de 535), las divisiones entre políticos de los partidos principales, el temor al socialismo y la amenaza de violencia de los trescientos mil «camisas negras» para atraer la atención del tímido rey Víctor Manuel III, quien vio en Mussolini a una estrella política en ascenso y un instrumento para neutralizar el malestar social.

Restaurado el orden político con el nombramiento de Mussolini y el socialismo en retroceso, el mercado bursátil italiano se disparó por las nubes. Viejos estadistas de la élite

liberal, como Giovanni Giolitti y Antonio Salandra, se hallaron aplaudiendo aquel giro de los acontecimientos. Veían en Mussolini a un aliado útil. Sin embargo, tal como el caballo de la fábula de Esopo, Italia no tardó en encontrarse tomada «por la brida y las espuelas».

Versiones distintas de esta misma historia se han repetido en todo el mundo en el transcurso del último siglo. Todo un elenco de recién llegados a la política, incluidos Adolf Hitler, Getúlio Vargas en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Hugo Chávez en Venezuela, ascendieron al poder por la misma vía: desde dentro, a través de comicios o alianzas con figuras políticas poderosas. En todos los casos, las élites consideraron que la invitación a tomar el poder «contendría» al recién llegado, lo cual permitiría a los políticos convencionales volver a tomar el control. Pero sus planes fracasaron. Una combinación letal de ambición, temor y errores de cálculo conspiró para conducirlos a cometer el mismo error fatídico: entregar voluntariamente las llaves del poder a un autócrata en ciernes.

¿Por qué incurrieron en tal desacuerdo estadistas respetados y con experiencia? Pocos ejemplos resultan más cautivadores que el ascenso de Adolf Hitler al poder en enero de 1933. Su capacidad para la insurrección violenta había quedado demostrada ya con el Putsch de la Cervecería de Múnich de 1923, un ataque nocturno por sorpresa en el que un grupo de partidarios suyos armados con pistolas se hicieron con el control de varios edificios gubernamentales y una cervecería de Múnich donde se hallaban congregados funcionarios bávaros. Su irreflexivo ataque fue contenido por las autoridades y Hitler pasó nueve meses en prisión, durante los cuales escribió su infame testamento personal, *Mein Kampf* (*Mi lucha*). A partir de entonces, Hitler se comprometió públicamente a llegar al poder por vía electoral. En un

principio, su movimiento nacionalsocialista recabó escasos votos. En 1919, una coalición prodemocrática de católicos, liberales y socialdemócratas había fundado el sistema político de Weimar. Pero, a principios de 1930, con la economía alemana tambaleándose, el centroderecha cayó presa de luchas internas y la popularidad de los comunistas y los nazis fue en aumento.

El Gobierno electo se desmoronó en marzo de 1930 en plena Gran Depresión. Con la acción gubernamental bloqueada por el estancamiento político, el presidente testaferro, el héroe de la Primera Guerra Mundial Paul von Hindenburg, aprovechó un artículo de la Constitución que confería al jefe del Estado la autoridad para nombrar a cancilleres en caso de darse la circunstancia excepcional de que el Parlamento no lograra nombrar a un Gobierno por mayoría. La función de dichos cancilleres no electos y del propio presidente no consistía sólo en gobernar, sino, además, en marginar a los radicales tanto dentro de la derecha como de la izquierda. En primer lugar, el economista del Partido de Centro Heinrich Brüning (que posteriormente huiría de Alemania y se convertiría en catedrático en Harvard) intentó sin éxito restaurar el crecimiento económico; su mandato como canciller fue breve. A continuación, el presidente Von Hindenburg designó al noble Franz von Papen, y posteriormente, con un desaliento creciente, a un íntimo amigo y rival de Von Papen, el general Kurt von Schleicher, exministro de Defensa. Sin embargo, sin mayorías parlamentarias en el Reichstag, la situación de punto muerto persistía. Los líderes, no sin motivo, temían las siguientes elecciones.

Convencidos de que «algo tenía que acabar funcionando», un contubernio de adversarios conservadores se reunió a finales de enero de 1933 y llegó a una solución: había que colocar a la cabeza del Gobierno a un candidato

independiente y popular. Lo despreciaban, pero sabían que al menos contaba con el apoyo de las masas. Y, sobre todo, creían que podían controlarlo.

El 30 de enero de 1933, Von Papen, uno de los principales ideólogos del plan, quitó hierro a la inquietud que generaba la apuesta de convertir a Adolf Hitler en canciller de una Alemania asolada por la crisis con las siguientes palabras tranquilizadoras: «Lo tenemos de nuestro w. [...] Dentro de dos meses tendremos a Hitler acogotado en un rincón».⁵ Cuesta imaginar un error de cálculo más colosal.

Las experiencias italiana y alemana ejemplifican el tipo de «alianza fatídica» que con frecuencia eleva a figuras autoritarias al poder.⁶ En cualquier democracia, los políticos afrontarán en algún momento arduos desafíos. La crisis económica, el descontento público creciente y el declive electoral de los principales partidos políticos pueden hacer que incluso los entendidos más experimentados cometan errores de juicio. Si aparece en escena un desconocido carismático y consigue popularidad desafiando al viejo orden establecido, los políticos del poder establecido sentirán tentaciones de incorporarlo a sus filas si tienen la sensación de estar perdiendo el control. Y si alguien de dentro del sistema rompe filas para acoger al recién llegado antes de que lo hagan sus adversarios, podrá utilizar la energía y la base de éste para superar tácticamente a sus pares. En tal caso, los políticos de la clase dirigente esperan poder encauzar también al advenedizo para que apoye sus programas.

Este tipo de pacto con el diablo suele mutar en beneficio del advenedizo, pues las alianzas otorgan a los recién llegados respetabilidad suficiente para convertirse en aspirantes legítimos al poder. En la Italia de principios de la década de 1920, el antiguo orden liberal se desmoronaba en medio de huelgas cada vez más frecuentes y de un creciente malestar social. La incapacidad de los partidos tradicionales de forjar mayorías parlamentarias sólidas llevó a la desesperación al

anciano primer ministro Giovanni Giolitti, quien cumplía su quinto mandato y, desoyendo los consejos de sus asesores, convocó elecciones anticipadas en mayo de 1921. Con el objetivo de aprovechar el atractivo para las masas de los fascistas, Giolitti decidió ofrecer al movimiento arribista de Mussolini un lugar en el «bloque burgués» de su grupo electoral, integrado por nacionalistas, fascistas y liberales.⁷ Su estrategia fracasó y el bloque burgués obtuvo menos del 20 por ciento de los votos, tras lo cual Giolitti presentó su dimisión. Sin embargo, el lugar que Mussolini ocupaba en las listas confirió a su variopinto grupo la legitimidad necesaria para permitir su auge.

Tales alianzas fatídicas no se circunscriben en absoluto a la Europa de entreguerras. También ayudan a explicar el ascenso de Hugo Chávez. Venezuela se vanagloriaba de ser la democracia más vetusta de Sudamérica, vigente desde 1958. Chávez, un suboficial militar que había liderado un golpe de Estado fallido y carecía de experiencia en la función pública, era un recién llegado a la política. Sin embargo, su ascenso al poder contó con el impulso definitivo de un infiltrado consumado: el expresidente Rafael Caldera, uno de los fundadores de la democracia venezolana.

Desde hacía largo tiempo, dos partidos dominaban el panorama político venezolano: Acción Democrática, de centroizquierda, y el Partido Socialcristiano de centroderecha de Caldera (conocido como el COPEI). Ambos se habían alternado el poder de manera pacífica durante más de treinta años y, en la década de 1970, Venezuela se consideraba una democracia modélica en una región plagada por los golpes de Estado y las dictaduras. Sin embargo, durante la década de 1980, la economía nacional, dependiente del petróleo, se sumió en una depresión prolongada, una crisis que se dilató durante más de una década y prácticamente duplicó el índice de pobreza. Y como es natural, el descontento creció entre la población venezolana. Los disturbios generalizados de febrero

de 1989 indicaban que los partidos establecidos se hallaban en problemas. Tres años más tarde, en febrero de 1992, un grupo de jóvenes oficiales militares se alzaron contra el presidente, Carlos Andrés Pérez. Con Hugo Chávez a la cabeza, los rebeldes se hacían llamar «bolivarianos» en honor al reverenciado héroe de la independencia Simón Bolívar. El golpe de Estado fracasó, pero Chávez, detenido, apareció en directo en televisión para instar a sus partidarios a deponer las armas (y declarar, con un colofón que acabaría por convertirse en leyenda, que la misión había fracasado «por ahora») y, al hacerlo, se convirtió en un héroe a ojos de muchos venezolanos, sobre todo de los más pobres. Tras un segundo golpe de Estado fallido en noviembre de 1992, Chávez, desde la prisión, cambió de estrategia y optó por alcanzar el poder por vía electoral. Iba a necesitar ayuda para hacerlo.

Aunque el expresidente Caldera era un estadista avezado y bien considerado, en 1992 su carrera política se hallaba en plena decadencia. Cuatro años antes no había conseguido garantizar la candidatura a la presidencia de su partido y se lo consideraba una suerte de reliquia política. Con todo, a sus setenta y seis años de edad, el senador seguía soñando con regresar a la presidencia y detectó en el ascenso de Chávez una cuerda de salvamento. La noche del primer golpe de Estado de Chávez, el expresidente se puso en pie durante una sesión conjunta extraordinaria del Congreso y abrazó la causa de los rebeldes declarando:

Es difícil pedirle al pueblo que se sacrifique por la libertad y la democracia cuando cree que tales libertad y democracia son incapaces de darles alimentos que comer, de evitar la subida astronómica del coste de la vida o de poner fin definitivo al terrible flagelo de la corrupción que, a ojos de todo el mundo, devora las instituciones venezolanas a cada día que pasa.⁸

Aquel fascinante discurso conlevó la resurrección de la carrera política de Caldera. Al conectar con el electorado antisistema de Chávez, el apoyo público al expresidente se multiplicó, cosa que le permitió llevar a cabo una exitosa campaña presidencial en 1993.

El flirteo público de Caldera con Chávez no sólo ayudó a impulsar su resultado en las urnas, sino que, además, otorgó a Chávez una credibilidad renovada. Chávez y sus camaradas habían intentado acabar con los treinta y cuatro años de democracia de su país y, sin embargo, en lugar de denunciar a los líderes golpistas por constituir una amenaza extremista, el expresidente les manifestó su simpatía en público y, con ello, les permitió acceder a la política general.

Caldera ayudó asimismo a abrir las puertas del palacio presidencial a Chávez al asestar un golpe mortal a los partidos venezolanos establecidos. En un asombroso giro de ciento ochenta grados, Caldera abandonó el COPEI, el partido que había fundado cerca de medio siglo antes, y presentó una candidatura independiente a la presidencia del país. Ciertamente, los partidos generales se hallaban ya en crisis, pero la partida de Caldera y la campaña antisistema subsiguiente contribuyeron a enterrarlos.⁹ El sistema de partidos se derrumbó después de que Caldera ganara los comicios de 1993 como candidato independiente, allanando el camino para futuros candidatos sorpresa. Cinco años después sería el turno de Chávez.

Con todo, en 1993, Chávez seguía afrontando un grave problema: se hallaba encarcelado a la espera de juicio por traición. Entonces, en 1994, el presidente Caldera retiró todos los cargos en su contra. El acto final de Caldera para impulsar a Chávez consistió en, literalmente, abrirle las puertas... de la cárcel. Justo después de su liberación, un periodista preguntó a Chávez adónde se dirigía. «Al poder», respondió él.¹⁰ La liberación de Chávez fue un gesto popular que respondía a una promesa electoral de Caldera. Como la mayoría de las

personas que integraban la élite venezolana, Caldera consideraba a Chávez una moda pasajera, alguien de quien probablemente el público general se habría olvidado para cuando se convocaran los próximos comicios.¹¹ Pero, al retirar todos los cargos contra él, en lugar de permitir que Chávez fuera juzgado y luego indultarlo, Caldera lo elevó y, de la noche a la mañana, transformó al antiguo golpista en un candidato presidencial viable.¹² El 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales, derrotando con facilidad a un candidato que contaba con el apoyo del sistema. El día de la toma de posesión, Caldera, el presidente saliente, no fue capaz de tomarle el juramento al cargo, tal como dictaba la tradición. En lugar de ello, permaneció taciturno a un lado.¹³

A pesar de las inmensas diferencias entre ellos, Hitler, Mussolini y Chávez siguieron rutas hasta el poder que comparten similitudes asombrosas. Además de ser en los tres casos desconocidos capaces de captar la atención pública, todos ellos ascendieron al poder porque políticos de la clase dirigente pasaron por alto las señales de advertencia y o bien les entregaron el poder directamente (Hitler y Mussolini) o bien les abrieron las puertas para alcanzarlo (Chávez).

La abdicación de la responsabilidad política por parte de líderes establecidos suele señalar el primer paso hacia la autocracia de un país. Años después de la victoria presidencial de Chávez, Rafael Caldera habló sin tapujos de sus errores: «Nadie imaginaba que el señor Chávez tuviera ni la posibilidad más remota de convertirse en presidente».¹⁴ Y tan sólo un día después de que Hitler fuera proclamado canciller, un destacado conservador que lo había aupado a tal puesto admitió: «Acabo de cometer la mayor estupidez de mi vida: me he aliado con el mayor demagogo de la historia mundial».¹⁵

No todas las democracias han caído en esta trampa. Algunos países, incluidos Bélgica, Gran Bretaña, Costa Rica y Finlandia, han afrontado desafíos de demagogos pero han sido capaces de mantenerlos al margen del poder. ¿Cómo lo han logrado? Resulta tentador creer que tal supervivencia arraiga en la sabiduría colectiva del electorado. Quizá los belgas y los costarricenses sencillamente fueran más democráticos que los ciudadanos alemanes o italianos. A fin de cuentas, nos gusta creer que el destino de un Gobierno se encuentra en manos de su ciudadanía. Mientras las personas tengan valores democráticos, la democracia estará protegida. En cambio, si la ciudadanía está dispuesta a responder a llamamientos autoritarios, antes o después la democracia estará en peligro.

Se trata de un planteamiento erróneo. Da por sentadas muchas cosas de la democracia, como el hecho de que «el pueblo» pueda moldear a su voluntad el tipo de Gobierno que posee. Cuesta encontrar indicios de un apoyo mayoritario al autoritarismo en la Alemania y la Italia de la década de 1920. Antes de que los nazis y los fascistas tomaran el poder, menos de un 2 por ciento de la población estaba afiliada a partidos y ninguna formación había logrado nada parecido a una mayoría de los votos en unas elecciones libres y justas. Más bien al contrario: mayorías electorales sólidas se opusieron a Hitler y Mussolini antes de que ambos hombres llegaran al poder con el apoyo de dirigentes políticos de dentro del sistema ciegos al peligro que entrañaban sus propias ambiciones.

Hugo Chávez fue elegido por una mayoría de los votantes, pero nada apunta a que los venezolanos ansiasen encumbrar a un hombre fuerte. A la sazón, el apoyo público a la democracia en Venezuela era superior al que había en Chile, un país que era y sigue siendo una democracia estable. Según una encuesta de 1998 del Latinobarómetro, el 60 por ciento de los venezolanos estaban de acuerdo con la afirmación «La democracia es preferible a otra forma de

gobierno», mientras que sólo el 25 por ciento aceptaba que «En ocasiones, un gobierno autoritario es mejor que democracia».¹⁶ En cambio, sólo el 53 por ciento de los encuestados en Chile convenía en que «La democracia es preferible a otra forma de gobierno».

Todas las democracias albergan a demagogos en potencia y, de vez en cuando, alguno de ellos hace vibrar al público. Ahora bien, en algunas democracias, los líderes políticos prestan atención a las señales de advertencia y adoptan medidas para garantizar que las personas autoritarias permanezcan marginadas y alejadas de los centros de poder. Frente al auge de extremistas o demagogos, protagonizan un esfuerzo conjunto por aislarlos y derrotarlos. Y si bien la respuesta de las masas a los llamamientos de extremistas reviste importancia, más importante aún es que las élites políticas y, sobre todo, los partidos políticos actúen de filtro. Dicho sin rodeos, los partidos políticos son los guardianes de la democracia.

Para poder mantener a raya a las personas autoritarias, en primer lugar hay que saber reconocerlas. Por desgracia, no existe ningún sistema de alerta anticipada infalible. Muchas personas autoritarias pueden ser identificadas fácilmente antes de llegar al poder. Su historial no deja lugar a dudas: Hitler había liderado un *putsch* fallido; Chávez había encabezado un alzamiento militar que concluyó en fracaso; los «camisas negras» de Mussolini perpetraban violencia paramilitar; y, en la Argentina de mediados del siglo xx, Juan Perón ayudó a dar un golpe de Estado fructífero dos años y medio antes de postularse como presidente del país.

Ahora bien, los políticos no siempre revelan la magnitud de su autoritarismo antes de ascender al poder. Algunos se adhieren a las normas democráticas en los albores de sus carreras y las abandonan posteriormente. Piénsese, por

ejemplo, en el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán y su partido, el Fidesz (la Unión Cívica Húngara), iniciaron su singladura como demócratas liberales a finales de la década de 1980 y, en su primer mandato como primer ministro, entre 1998 y 2002, Orbán gobernó democráticamente. Su vuelco autocrático tras regresar al poder en 2010 fue una auténtica sorpresa.

¿Cómo se identifica entonces el autoritarismo en políticos que no tienen un historial antidemocrático evidente? Para responder a esta cuestión nos remitimos al eminentе politólogo Juan Linz. Nacido en la Alemania de Weimar y criado en plena Guerra Civil española, Linz conocía bien los peligros de perder la democracia. Mientras ejercía como profesor en Yale, consagró gran parte de su carrera profesional a intentar entender cómo mueren las democracias. Muchas de las conclusiones de Linz pueden consultarse en un libro cortito pero fundamental titulado *La quiebra de las democracias*. Publicado en 1978, el libro recalca la función de los políticos y demuestra que su actitud puede apuntalar la democracia o hacerla tambalearse. Además, el autor esbozaba una prueba definitiva para identificar a los políticos antidemocráticos, si bien no llegó a desarrollarla del todo.¹⁷

A partir del trabajo de Linz, hemos concebido un conjunto de cuatro señales de advertencia conductuales que pueden ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante.¹⁸ Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. La tabla 1 indica cómo evaluar a los políticos en atención a estos cuatro factores.

Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación. ¿Qué tipo de candidatos suelen dar positivo en una prueba de papel tornasol para detectar el autoritarismo? Con frecuencia, los candidatos populistas externos al sistema. Los populistas suelen ser políticos antisistema, figuras que afirman representar la voz del «pueblo» y que libran una guerra contra lo que describen como una élite corrupta y conspiradora. Los populistas tienden a negar la legitimidad de los partidos establecidos, a quienes atacan tildándolos de antidemocráticos o incluso de antipatrióticos. Les dicen a los votantes que el sistema existente en realidad no es una democracia, sino que ésta ha sido secuestrada, está corrupta o manipulada por la élite. Y les prometen enterrar a esa élite y reintegrar el poder «al pueblo». Este discurso debe tomarse en serio. Cuando líderes populistas ganan las elecciones, suelen asaltar las instituciones democráticas. En Latinoamérica, por ejemplo, de los quince presidentes elegidos en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela entre 1990 y 2012, cinco eran populistas advenedizos: Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Y los cinco acabaron debilitando las instituciones democráticas.¹⁹

TABLA 1
Cuatro indicadores clave
de comportamiento autoritario

<p>1. Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego.</p>	<p>¿Rechazan la Constitución o expresan su voluntad de no acatarla?</p> <p>¿Sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas, como cancelar elecciones, incumplir o suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir los derechos políticos o civiles básicos?</p> <p>¿Pretenden usar (o aprueban el uso de) medidas extraconstitucionales para cambiar el Gobierno, como golpes militares, insurrecciones violentas</p>
--	---

	<p>o manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio en el Gobierno?</p> <p>¿Intentan socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo negándose a aceptar unos resultados electorales creíbles?</p>
2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos.	<p>¿Describen a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional establecido?</p> <p>¿Afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante?</p> <p>¿Describen sin argumentos a sus rivales de otros partidos como delincuentes cuyo supuesto incumplimiento de la ley (o potencial para incumplirla) los descalifica para participar de manera plena en la esfera política?</p> <p>¿Sugieren de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros que trabajan secretamente en alianza con (o a sueldo de) un Gobierno foráneo, normalmente de un país enemigo?</p>
3. Tolerancia o fomento de la violencia.	<p>¿Tienen lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas ilegales?</p> <p>¿Han patrocinado ellos mismos o sus aliados de partido linchamientos a adversarios?</p> <p>¿Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades?</p> <p>¿Han elogiado (o se han negado a condenar) otros actos destacados de violencia política, tanto pasados como acontecidos en otros lugares del mundo?</p>

Mantener a los políticos autoritarios al margen del poder es más fácil de decir que de hacer. Al fin y al cabo, se supone que en las democracias no se ilegalizan partidos ni se prohíbe a candidatos postularse a las elecciones (y nosotros no abogamos por tales medidas). La responsabilidad de cribar a las personas autoritarias y dejarlas fuera recae más bien en los partidos políticos y en sus líderes: los guardianes de la democracia.

Para que ese cribado se lleve a cabo con éxito, los partidos generales deben aislar y derrotar a las fuerzas extremistas, un comportamiento que la politóloga Nancy Bermeo denomina «distanciamiento».²⁰ Los partidos prodemocráticos pueden participar de dicho distanciamiento de modos diversos. En primer lugar, pueden mantener a los líderes potencialmente autoritarios fuera de las listas electorales en época de elecciones. Ello exige resistirse a la tentación de designar a dichos extremistas para cargos de relevancia incluso aunque puedan acarrearles votos.

En segundo lugar, los partidos pueden escardar de raíz a los extremistas que pueblan las bases de sus filas. Pensemos, por ejemplo, en el Partido Conservador sueco (AVF) durante el peligroso período de entreguerras. Las juventudes del AVF (una organización de activistas en edad de votar), conocidas como Organización de las Juventudes Nacionalistas Suecas, fueron volviéndose cada vez más radicales en los primeros años de la década de 1930, cuando criticaron la democracia parlamentaria y manifestaron explícitamente su apoyo a Hitler e incluso crearon un grupo de tropas de asalto uniformadas.²¹ El AVF respondió en 1933 expulsando de sus filas a esta organización. La pérdida de veinticinco mil miembros podía costarle votos en las elecciones municipales de 1934, pero su estrategia de distanciamiento socavó la influencia de las fuerzas antidemocráticas en el principal partido de centroderecha sueco.²²

En tercer lugar, los partidos prodemocráticos pueden eludir toda alianza con partidos y candidatos antidemocráticos. Como hemos visto en el caso de Italia y Alemania, en ocasiones los partidos prodemocráticos se sienten tentados de alinearse con extremistas de su flanco ideológico para ganar votos o, en los sistemas parlamentarios, para formar gobiernos. Sin embargo, tales alianzas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Tal como escribió Linz, la defunción de muchas democracias puede retrotraerse a la «afinidad mayor que un partido básicamente orientado al mantenimiento del sistema muestra con los extremistas que están a su lado en el espectro político que con los partidos moderados del sistema al otro lado del extremo».23

En cuarto lugar, los partidos prodemocráticos pueden adoptar medidas para aislar sistemáticamente a los extremistas, en lugar de legitimarlos. Para ello, los políticos deben evitar actos que contribuyen a «normalizar» o confieren respetabilidad pública a figuras autoritarias, como los mítines conjuntos de los conservadores alemanes con Hitler en los albores de la década de 1930 o el discurso de Caldera en el que expresaba su simpatía por Chávez.

Por último, cuando los extremistas se postulan como serios contrincantes electorales, los partidos generalistas deben forjar un frente común para derrotarlos. Por citar a Linz, deben mostrar su «voluntad de unirse a grupos ideológicamente distantes pero comprometidos a salvar el orden político democrático».24 En circunstancias normales, esto es prácticamente inconcebible. Imaginemos, por ejemplo, al senador Edward Kennedy y otros demócratas liberales haciendo campaña en favor de Ronald Reagan o al Partido Laborista británico y sus sindicatos aliados dando su apoyo a Margaret Thatcher. Los votantes de cada partido enfurecerían ante tal traición aparente a los principios. Pero, en circunstancias excepcionales, un liderazgo valiente

comporta poner la democracia y al país por delante del partido y explicar al electorado lo que está en juego. Cuando un partido o un político que da positivo en nuestra prueba decisiva emerge como una amenaza electoral seria, no quedan demasiadas alternativas. Un frente democrático unido puede impedir que un extremista acceda al poder, cosa que, a su vez, puede comportar salvar la democracia.

Aunque los fracasos son más memorables, algunas democracias europeas practicaron una estrategia de cribado y salvaguarda de la democracia exitosa en el período de entreguerras. Sorprendentemente, de pequeños países pueden extraerse grandes lecciones. Pensemos en Bélgica y en Finlandia. En los años de crisis política y económica en Europa, en las décadas de 1920 y 1930, ambos países experimentaron una señal de advertencia temprana de quiebra de la democracia, en la forma de auge de grupos extremistas antisistema, si bien, a diferencia de Italia y Alemania, se salvaron gracias a que sus élites políticas defendieron las instituciones democráticas (al menos hasta la invasión nazi varios años más tarde).

Durante las elecciones generales de 1936 en Bélgica, mientras el contagio del fascismo se extendía desde Italia y Alemania por toda Europa, los votantes optaron por un resultado discordante. Dos partidos autoritarios de extrema derecha, el Partido Rexista y el Partido Nacionalista flamenco o Vlaams Nationaal Verbond (VNV), subieron como la espuma en las urnas, captando casi el 20 por ciento del voto popular y desafiando con ello el predominio histórico de los tres partidos generalistas: el Partido Católico, de centroderecha, los socialistas y el Partido Liberal. El desafío que encarnaba el líder del Partido Rexista, Léon Degrelle, un periodista católico que posteriormente sería colaborador nazi, era especialmente acusado. Degrelle, un crítico virulento de la democracia

parlamentaria que recibió aliento y apoyo económico tanto de Hitler como de Mussolini, se había alejado de la extrema derecha del Partido Católico, a cuyos líderes acusaba ahora de corruptos.

Las elecciones de 1936 sacudieron a los partidos centristas, que sufrieron pérdidas generales. Conscientes de los movimientos antidemocráticos de las vecinas Italia y Alemania y temerosos por su propia supervivencia, acometieron la desalentadora tarea de decidir cómo reaccionar. El Partido Católico, en particular, afrontaba un dilema peliagudo: colaborar con sus adversarios de toda la vida, los socialistas y los liberales, o forjar una alianza de ala derechista que incluyera a los rexistas, un partido con el cual compartía cierta afinidad ideológica pero que rechazaba el valor de la política democrática.

A diferencia de los políticos de Italia y Alemania, que se batieron en retirada, los dirigentes católicos belgas declararon que cualquier colaboración con los rexistas era incompatible con la afiliación al partido y, a continuación, implementaron una estrategia doble para combatir el movimiento. A nivel interno, los líderes del Partido Católico reforzaron la disciplina escrutando a los candidatos en busca de simpatías prorrexistas y expulsando a quienes expresaban opiniones extremistas. Además, el liderazgo del partido se posicionó de manera vehemente en contra de la colaboración con la extrema derecha.²⁵ A nivel externo, el Partido Católico se enfrentó a los rexistas en su propio terreno. El Partido Católico adoptó nuevas tácticas de campaña y propaganda dirigidas a los jóvenes católicos, que anteriormente habían formado parte de la base del Partido Rexista. En diciembre de 1935 crearon el Frente de las Juventudes Católicas y empezaron a presentar a antiguos aliados en contra de Degrelle.²⁶

El enfrentamiento final entre el Partido Rexista y el Partido Católico, a resultas del cual el rexismo quedó efectivamente marginado (hasta la ocupación nazi), se centró en la formación de un nuevo Gobierno tras los comicios de 1936. El Partido Católico dio su apoyo al primer ministro católico titular, Paul Van Zeeland.²⁷ Una vez Van Zeeland se hubo hecho nuevamente con el puesto de primer ministro, se barajaban dos opciones principales para formar gobierno. La primera era forjar una alianza con los rivales socialistas, en la línea del Frente Popular francés, que tanto Van Zeeland como otros dirigentes católicos habían aspirado a evitar en un principio. La segunda alternativa era una alianza de ala derechista con fuerzas antisocialistas entre las cuales se incluían el Partido Rexista y el VNV. No era una decisión fácil; la segunda opción contaba con el respaldo de una facción tradicionalista que pretendía desbaratar el frágil gabinete de Van Zeeland apelando a las bases católicas, organizando una «Marcha sobre Bruselas» y forzando unas elecciones extraordinarias en las que el líder rexista Degrelle se enfrentaría a Van Zeeland.²⁸ Tales planes se frustraron en 1937 cuando Degrelle perdió las elecciones extraordinarias, en gran medida porque los parlamentarios del Partido Católico habían adoptado una postura clara: rehusaron respaldar el plan de los tradicionalistas y, en su lugar, se aliaron con los liberales y los socialistas en apoyo a Van Zeeland. Aquél fue el acto de cribado y salvaguarda de la democracia más destacado del Partido Católico.

La postura del Partido Católico estuvo en parte propiciada por el rey Leopoldo III y por el Partido Socialista. En las elecciones de 1936, el Partido Socialista se había impuesto como el más votado de la legislatura, cosa que le concedía la prerrogativa de formar gobierno. Sin embargo, cuando quedó claro que los socialistas no contarían con apoyos suficientes en el Parlamento, en lugar de convocar unos nuevos comicios, que podrían haber entregado aún más

escaños a los partidos extremistas, el monarca se reunió con los dirigentes de los principales partidos para convencerlos de que formaran un gabinete con poderes compartidos liderado por el primer ministro titular, Van Zeeland, un gabinete que integraría tanto a católicos conservadores como a socialistas y excluiría a los partidos antisistema de ambos extremos.²⁹ Y aunque los socialistas desconfiaban de Van Zeeland, un hombre del Partido Católico, pusieron la democracia por delante de sus propios intereses y apoyaron aquella gran coalición.

Una dinámica similar tuvo lugar en Finlandia, donde el movimiento de extrema derecha Lapua irrumpió en la escena política en 1929, amenazando la frágil democracia del país.³⁰ El movimiento perseguía la destrucción del comunismo por todos los medios necesarios.³¹ Amenazaba con acciones violentas si no se cumplían sus demandas y atacaba a los políticos de los partidos mayoritarios, a quienes consideraba colaboradores de los socialistas. Al principio, los políticos de la Unión Agraria de centroderecha, el partido gobernante, flirtearon con el Movimiento Lapua, cuyo anticomunismo encontraban políticamente útil; colmaban las demandas del movimiento de denegar derechos políticos a los comunistas al tiempo que toleraban la violencia de extrema derecha.³² En 1930, P. E. Svinhufvud, un conservador a quienes los líderes de Lapua consideraban «uno de los suyos», fue designado primer ministro y les ofreció dos carteras ministeriales.³³ Un año más tarde, Svinhufvud se proclamó presidente del país. Pero ello no fue óbice para que el Movimiento Lapua continuara desplegando su comportamiento extremista; con los comunistas prohibidos, situó en su punto de mira al Partido Socialdemócrata, más moderado.³⁴ Matones de Lapua secuestraron a más de mil socialdemócratas, incluidos entre ellos dirigentes sindicalistas y parlamentarios.³⁵ El Movimiento Lapua organizó asimismo una marcha de doce mil personas sobre Helsinki (tomando como modelo la mítica

Marcha sobre Roma) y, en 1932, respaldó un intento de golpe de Estado destinado a reemplazar al Gobierno por otro «apolítico» y «patriota». ³⁶

Sin embargo, a medida que el Movimiento Lapua fue volviéndose más radical, los partidos conservadores tradicionales de Finlandia rompieron enérgicamente con él. A finales de 1930, el grueso de la Unión Agraria, el liberal Partido del Progreso y gran parte del Partido Popular Sueco cerraron filas con su principal adversario ideológico, los socialdemócratas, en el llamado Frente de la Legalidad para defender la democracia frente a extremistas violentos.³⁷ Incluso el presidente conservador, Svinhufvud, rechazó categóricamente (y acabó ilegalizando) a sus antiguos aliados.³⁸ El Movimiento Lapua quedó aislado y el breve brote de fascismo en Finlandia, abortado.³⁹

No sólo en casos históricos pretéritos se encuentran ejemplos de una correcta salvaguarda de la democracia. En Austria en 2016, el principal partido de centroderecha (el Partido Popular Austríaco u ÖVP) mantuvo de manera efectiva al Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), de derecha radical, al margen de la presidencia. Austria cuenta con una dilatada historia de política de extrema derecha y el FPÖ es uno de los partidos de derecha radical más potentes de Europa. El sistema político austriaco acusaba una creciente vulnerabilidad debido a que los dos partidos principales, el socialdemócrata SPÖ y el democristiano ÖVP, que se habían alternado la presidencia del país durante el período de posguerra, se hallaban debilitados. En 2016, su predominio fue desafiado por dos advenedizos: el expresidente del Partido Verde, Alexander Van der Bellen, y el líder extremista del FPÖ, Norbert Hofer.

Para sorpresa de la mayoría de los analistas, en la primera ronda, Van der Bellen y el antisistema de ala derecha Hofer quedaron como los dos candidatos que se enfrentarían en la segunda vuelta. Debido a un error de procedimiento en

octubre de 2016, la segunda vuelta se celebró en diciembre. Llegados a aquel punto, varios políticos destacados, incluidos algunos pertenecientes al conservador ÖVP, defendían que había que derrotar a Hofer y a su Partido de la Libertad. Hofer había aparecido exhortando a la violencia contra los inmigrantes y muchos se planteaban si, una vez elegido, concedería privilegios a su partido que vulneraran las normas tradicionales según las cuales el presidente debía mantenerse por encima de la política. Frente a tal amenaza, algunas figuras ilustres del ÖVP se esforzaron por derrotar a Hofer expresando su apoyo a su rival ideológico, el candidato de izquierdas del Partido Verde, Van der Bellen. El candidato presidencial del ÖVP, Andreas Khol, respaldó a Van der Bellen, tal como también hicieron el presidente Reinhold Mitterlehner, la ministra Sophie Karmasin y docenas de alcaldes del ÖVP en el ámbito rural austriaco. El expresidente Erhard Busek defendió por escrito en una carta a Van der Bellen «no con pasión, sino tras una concienzuda deliberación»⁴⁰ y añadió que tal decisión respondía al sentimiento de que «no queremos recibir la felicitación de Le Pen, Jobbik, Wilders y el AfD [y otros extremistas] tras las elecciones presidenciales». Van der Bellen ganó por sólo trescientos mil votos.

Para adoptar esta postura fue necesario un coraje político considerable. De acuerdo con un alcalde del Partido Católico de una pequeña ciudad situada a las afueras de Viena, Stefan Schmuckenschlager, que respaldó al candidato del Partido Verde, tal decisión había dividido a familias.⁴¹ Su hermano gemelo, otro líder del partido, había apoyado a Hofer. Tal como explicó el propio Schmuckenschlager, a veces hay que dejar de lado la política del poder para hacer lo correcto.

¿Ayudaron en algo los apoyos procedentes del ÖVP? Los hechos demuestran que, en efecto, así fue. Según las encuestas a pie de urna, el 55 por ciento de los encuestados

que se identificaban como partidarios del ÖVP aseguraron haber votado a Van der Bellen y el 48 por ciento de los votantes de Van der Bellen afirmaron haberlo votado para evitar la victoria de Hofer. Además, la fuerte división entre el ámbito urbano y el rural que siempre ha caracterizado la política austriaca (entre las zonas urbanas de izquierdas y las zonas rurales de derechas) se atenuó de manera espectacular en la segunda vuelta de diciembre de 2016, en la que un número sorprendente de circunscripciones rurales, por tradición conservadoras, desviaron su voto a Van der Bellen.

En suma, en 2016, dirigentes responsables del ÖVP resistieron la tentación de aliarse con un partido extremista de su propio flanco ideológico y el resultado fue la derrota de dicho partido. El ascenso del FPÖ en las elecciones parlamentarias de 2017, que lo posicionaron para convertirse en un socio minoritario de un nuevo Gobierno de derechas, dejó claro que el dilema que afrontan los conservadores austriacos persiste. Aun así, su esfuerzo por mantener a un extremista alejado de la presidencia proporciona un modelo útil de salvaguarda de la democracia en el mundo contemporáneo.

Por su parte, Estados Unidos tiene un historial imponente de salvaguarda de la democracia. Tanto los demócratas como los republicanos han cribado a figuras extremistas en sus márgenes, algunas de las cuales contaban con un respaldo público considerable. Durante décadas, ambos partidos lograron mantener a dichas figuras al margen de la política general. Hasta 2016, como es bien sabido.

SALVAGUARDA DE LA DEMOCRACIA EN ESTADOS UNIDOS

En la obra *La conjura contra América*, el novelista estadounidense Philip Roth se basa en acontecimientos históricos reales para imaginar cómo podría haber sido el fascismo en unos Estados Unidos de preguerra.

Charles Lindbergh, una de las primeras celebridades de los medios de comunicación en el país, es el protagonista de la novela: tras su ascenso meteórico a la fama en 1927 después de sobrevolar en solitario el Atlántico, se convierte en un ardiente defensor del aislacionismo y en simpatizante del nazismo. Es en ese punto donde la historia da un vuelco fantástico en manos de Roth: en lugar de desvanecerse en la oscuridad, Lindbergh llega en avión a la convención de 1940 del Partido Republicano en Filadelfia a las 3:14 de la madrugada, cuando un auditorio hasta los topes se halla en un punto muerto en la vigésima votación. Al grito de «¡Lindy! ¡Lindy! ¡Lindy!», los presentes lo ovacionan durante treinta minutos ininterrumpidos en el salón de convenciones y, en un momento de fervor colectivo intenso, su nombre se propone, secunda y aprueba por aclamación como candidato del partido a la presidencia del país. Lindbergh, un hombre sin experiencia política pero con un dominio incomparable de los medios de comunicación, desoye los consejos de sus asesores y hace campaña pilotando de estado en estado su emblemático avión monoplaza, el *Spirit of St. Louis*, ataviado con un mono, botas altas y gafas de aviador.

En este mundo del revés, Lindbergh derrota a Franklin Delano Roosevelt, el titular del puesto, y es proclamado presidente. Entonces Lindbergh, cuya campaña, según se revela más adelante, estaba vinculada con Hitler, firma tratados de paz con los enemigos de Estados Unidos. Una oleada de antisemitismo y violencia se desencadena en todo el país.

Muchos estadounidenses han encontrado paralelismos entre las elecciones presidenciales de 2016 y la novela de Roth. La premisa de que un candidato sorpresa con dudosas credenciales democráticas ascienda al poder con la ayuda de un país extranjero ciertamente suena familiar. Ahora bien, la comparación plantea otro interrogante ineludible: dada la gravedad de la crisis económica de la década de 1930 en Estados Unidos, ¿cómo se explica que algo así no sucediera realmente en el país?

El motivo por el cual ningún demagogo extremista ascendió a la presidencia antes de 2016 no cabe buscarlo ni en la ausencia de aspirantes ni en la falta de apoyo público. Al contrario, figuras extremistas han salpicado desde hace largo tiempo el paisaje político estadounidense. Sólo en la década de 1930 existían en Estados Unidos hasta ochocientos grupos extremistas de derechas.¹ Entre las figuras más destacadas surgidas durante este período figuró el padre Charles Coughlin, un sacerdote católico antisemita cuyo programa radiofónico de un nacionalismo impetuoso llegaba a un público de cuarenta millones de oyentes cada semana. El padre Coughlin, declaradamente antidemócrata, exigía la abolición de los partidos políticos y ponía en tela de juicio el valor de las elecciones. Su diario, *Social Justice*, adoptó posturas profascistas en la década de 1930, proclamó a Mussolini «Hombre de la Semana» y defendió con frecuencia el régimen nazi.² Pese a su extremismo, el padre Coughlin era

inmensamente popular. La revista *Fortune* lo calificó como «lo mejor que le ha ocurrido nunca a la radio».³ Pronunciaba discursos ante estadios y auditorios abarrotados en todo el país⁴ y, mientras viajaba de ciudad en ciudad, sus fans flanqueaban las carreteras de su recorrido para saludarlo a su paso.⁵ Algunos observadores coetáneos lo calificaron como la figura más influyente de Estados Unidos después de Roosevelt.

La Depresión también aupó al gobernador y senador de Luisiana Huey Long, quien se apodaba a sí mismo el Pez Rey. El historiador Arthur M. Schlesinger júnior lo describió como «el mayor demagogo del momento, un hombre que recordaba [...] a un dictador latinoamericano, a un Vargas o a un Perón».⁶ El Rey Pez era un orador avezado con un discurso machacón que denostaba el imperio de la ley de manera rutinaria.⁷ Como gobernador, Long construyó lo que Schlesinger describió como «la mayor aproximación a un estado totalitario que la república de Estados Unidos haya conocido», recurriendo a una amalgama de sobornos y amenazas para meter en cintura a la asamblea legislativa, al poder judicial y a la prensa del estado.⁸ A la pregunta de un legislador de la oposición sobre si había oído hablar de la Constitución estatal, Long respondió: «Yo soy la Constitución ahora».⁹ El editor de prensa Hodding Carter calificó a Long como «el primer verdadero dictador surgido de suelo estadounidense».¹⁰ Y cuando el director de campaña de Franklin Roosevelt, James A. Farley, conoció a Mussolini en Roma en 1933, escribió que el dictador italiano «me ha recordado a Huey Long».¹¹

Long logró un seguimiento masivo del público con su llamamiento a distribuir la riqueza. Se dice que en 1934 «recibió más correspondencia que todos los demás senadores juntos, más incluso que el propio presidente».¹² Para entonces, el movimiento Share Our Wealth (compartir nuestra riqueza) contaba con más de veintisiete mil células en

todo el país y con una lista de correo con cerca de ocho millones de nombres.¹³ Long planeaba presentarse a la presidencia¹⁴ y había asegurado a un periodista del *New York Times*: «Puedo imponerme al tal Roosevelt. [...] Puedo hacer más promesas que él. Y él lo sabe».¹⁵ Roosevelt consideraba a Long una amenaza seria, de la que se libró cuando Long fue asesinado en septiembre de 1935.¹⁶

La tendencia autoritaria en Estados Unidos persistió durante la edad dorada posterior a la Segunda Guerra Mundial. El senador Joseph McCarthy, que utilizó el temor a la subversión comunista de los años de la Guerra Fría para fomentar la confección de listas negras, la censura y la prohibición de libros, disfrutaba de un amplio apoyo entre la población estadounidense.¹⁷ En el momento álgido del poder político de McCarthy, las encuestas demostraban que prácticamente la mitad de los estadounidenses le daban su aprobación. Incluso después de que el Senado lo censurara en 1954, McCarthy registraba un 40 por ciento de apoyo en las encuestas Gallup.¹⁸

Una década más tarde, la postura segregacionista desafiante del gobernador de Alabama George Wallace lo catapultó a la palestra nacional y desembocó en sendos intentos sorprendentemente vigorosos de candidatura a la presidencia del país en 1968 y 1972. Wallace comulgaba con lo que el periodista Arthur Hadley denominó «la vetusta y honorable tradición estadounidense de odiar a los poderosos».¹⁹ Era, en palabras de Hadley, un maestro explotando la «vieja rabia estadounidense más básica». A menudo, Wallace alentó la violencia y mostró un desprecio absoluto hacia las normas constitucionales, llegando a declarar:

Hay algo más poderoso que la Constitución: [...] la voluntad del pueblo. ¿Qué es, si no, una Constitución? El producto del pueblo. El pueblo es la fuente principal de la que emana el poder y el pueblo puede abolir una Constitución si tal es su designio.²⁰

El mensaje de Wallace, que amalgamaba tesis racistas con llamamientos populistas al sentimiento de victimismo y al malestar social de la población blanca de clase obrera, le permitió abrirse camino entre las bases de trabajadores manuales, por tradición votantes del Partido Demócrata.²¹ Las encuestas indicaban que aproximadamente el 40 por ciento de los estadounidenses apoyaba la candidatura del tercer partido de Wallace en 1968 y, en 1972, este hizo temblar a la clase dirigente postulándose como un verdadero contrincante de los demócratas en las primarias.²² Cuando la campaña de Wallace descarriló a causa de un intento de asesinato en mayo de 1972 aventajaba a George McGovern en más de un millón de votos en las primarias.²³

En pocas palabras, la veta autoritaria de los estadounidenses viene de lejos. No era insólito que figuras como Coughlin, Long, McCarthy y Wallace obtuvieran el apoyo de una minoría considerable del país, de un 30 o incluso un 40 por ciento de la población. A menudo se dice que la cultura política nacional de Estados Unidos en cierto sentido lo inmuniza frente a tales propuestas, pero ello implica contemplar la historia con gafas color de rosa. La verdadera protección frente a figuras autoritarias en potencia no ha sido el firme compromiso de los estadounidenses con la democracia, sino más bien el papel de sus guardianes: los partidos políticos del país.

El 8 de junio de 1920, cuando la presidencia de Woodrow Wilson tocaba su fin, delegados republicanos se reunieron para elegir a su candidato en el Coliseo de Chicago, una sala engalanada con banderas pero mal ventilada donde se superaron temperaturas abrasadoras de treinta y ocho grados. Tras nueve votaciones en cuatro días, la convención continuaba sin llegar a una decisión. El viernes por la tarde, en la *suite* 404 de la planta 13 del cercano Hotel Blackstone, el

entonces presidente del Comité Nacional Republicano, Will Hays, y George Harvey, el poderoso editor de *Harvey's Weekly*, recibieron por turnos a puerta cerrada a un grupo de senadores y líderes del partido estadounidense en la «habitación llena de humo» original.²⁴ La Vieja Guardia, como los apodó la prensa, se sirvió bebidas, fumó cigarros y habló hasta entrada ya la madrugada acerca de cómo acabar con aquel punto muerto y designar al candidato a la presidencia que necesitaban los 493 delegados.

El principal contrincante en el salón de convenciones era el general de división Leonard Wood, un viejo aliado de Theodore Roosevelt que había suscitado el entusiasmo popular en las primarias y había dominado la votación a principios de la semana, con 287 delegados. Lo seguían el gobernador de Illinois Frank Lowden, el senador por California Hiram Johnson y el senador de Ohio Warren G. Harding, muy rezagado, en cuarto lugar, con solo 65,5 delegados. Desde el salón de convenciones, los reporteros escribían: «Nadie pronuncia el nombre de Harding. [...] Ni siquiera se lo tiene en cuenta entre las incógnitas más prometedoras».²⁵ Al tener noticia de las conversaciones que estaban teniendo lugar en el Blackstone, los periodistas más motivados se las apañaron para acceder a aquella decimotercera planta del hotel y se reunieron en silencio en los pasillos cerca de la suite 404 para atisbar el ir y venir de senadores destacados, incluidos entre ellos Henry Cabot Lodge de Massachusetts, McCormick de Illinois, Phipps de Colorado, Calder de Nueva York y el exsenador Crane de Massachusetts, entre otros.

En el interior de la suite 404 se revisaron con suma atención los pros y contras de cada candidato (Knox era demasiado viejo, a Lodge no le gustaba Coolidge...). A la una de la madrugada, siete miembros de la Vieja Guardia permanecían en la habitación y votaron al candidato poniéndose en pie. A las 2:11 de la madrugada, George Harvey

telefoneó a un desconcertado Harding para informarle de que había sido el elegido. Se corrió la voz. La tarde siguiente, en la décima votación y para gran alivio de los sofocados delegados, Warren G. Harding recibió el respaldo abrumador de 692,2 delegados de la convención entre una calurosa ovación. A pesar de que sólo había obtenido un 4 por ciento de los votos en la primera ronda, se había convertido en el candidato a la presidencia del Partido Republicano para las elecciones de 1920.

Hoy en día a nadie le gustan las habitaciones llenas de humo, y con motivo. No eran muy democráticas. Los candidatos los elegía un reducido grupo de traficantes de influencias que no rendía cuentas ante las bases del partido y mucho menos ante la ciudadanía. Y no siempre salieron buenos presidentes de aquellas negociaciones privadas: sin ir más lejos, el mandato de Harding estuvo marcado por el escándalo. Ahora bien, la elección del candidato a puerta cerrada tenía una virtud que suele pasarse por alto en la actualidad: cribaba y mantenía a las figuras demostradamente inadecuadas fuera de las votaciones y de la Casa Blanca y, por ende, cumplía una función de salvaguarda de la democracia. Huelga decir que el motivo para ello no era la elevada moralidad de la cúpula del partido, sino que a los «jefes», como los llamaban en la oposición, les interesaba seleccionar apuestas seguras con opciones de ganar. Principalmente, era su aversión al riesgo lo que les impulsaba a esquivar a los extremistas.

La salvaguarda de las instituciones se remonta al nacimiento de la república estadounidense. La Constitución de 1787 estableció el primer sistema presidencial del mundo. El presidencialismo plantea desafíos específicos al cribado. En las democracias parlamentarias, el primer ministro es un parlamentario a quien eligen los principales partidos con representación en el Parlamento, cosa que prácticamente garantiza su idoneidad a ojos del estamento político.²⁶ El

propio proceso de constitución del Gobierno actúa de filtro. En cambio, los presidentes no ocupan escaños en el Congreso ni son elegidos por éste. Al menos en teoría, es el pueblo quien los elige, cualquiera puede postularse como presidente y, si cuenta con los apoyos necesarios, ganar.

A los padres fundadores de la nación estadounidense les preocupaba hondamente salvaguardar la democracia mediante mecanismos de cribado. Al diseñar la Constitución y el sistema electoral afrontaron un dilema que, en muchos aspectos, continúa vigente. Por un lado, optaron no por un monarca, sino por un presidente electo, un presidente que se ajustara a su idea de un Gobierno popular republicano que reflejara la voluntad del pueblo. Por otro lado, los fundadores no confiaban plenamente en la capacidad de la ciudadanía para juzgar la adecuación de los candidatos a la presidencia. A Alexander Hamilton le preocupaba que una presidencia por elección popular pudiera caer fácilmente en manos de quienes aprovechan el miedo y la ignorancia para ganar elecciones y éstos acabaran gobernando como tiranos.²⁷ «La historia nos enseña que el primero ha resultado un camino mucho más seguro que el segundo para la introducción del despotismo, y que casi todos los hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas empezaron su carrera cortejando servilmente al pueblo: se iniciaron como demagogos y acabaron en tiranos», escribió Hamilton en *Los papeles federalistas*. Para Hamilton y sus colegas, era imprescindible dotar las elecciones de algún mecanismo de cribado.²⁸

Y el mecanismo que se les ocurrió fue el del Colegio Electoral,* integrado por los compromisarios. El artículo II de la Constitución establecía un sistema de elecciones indirecto que reflejaba las ideas expresadas por Hamilton en *El federalista* 68:

Igualmente conveniente era que la elección inmediata fuera hecha por los hombres más capaces de analizar las cualidades que es conveniente poseer para ese puesto, quienes deliberaran en circunstancias favorables y tomaran prudentemente en cuenta todas las razones y alicientes que deben formar su selección.²⁹

El Colegio Electoral, integrado por hombres prominentes en la esfera local de cada estado, los llamados compromisarios, sería el responsable de elegir al presidente. Según este acuerdo, razonaba Hamilton, «el proceso electivo nos da la certidumbre moral de que el cargo de presidente no recaerá nunca en un hombre que no posea en grado conspicuo las dotes exigidas». Los hombres con habilidades «en la pequeña intriga y en esos bajos trucos que provocan la popularidad» no pasarían el filtro. De este modo, el Colegio Electoral se convirtió en el mecanismo de cribado original de la democracia de Estados Unidos.

Sin embargo, este sistema acabó por ser efímero, debido a los defectos del diseño original de los fundadores. En primer lugar, la Constitución no dice nada acerca de cómo deben seleccionarse los candidatos presidenciales. El Colegio Electoral entra en acción después de que el electorado vote y no determina en modo alguno quién puede aspirar a la presidencia. En segundo lugar, la Constitución no menciona en ningún momento a los partidos políticos. Aunque Thomas Jefferson y James Madison acabarían por ser los pioneros del sistema bipartidista estadounidense, los fundadores no contemplaban seriamente la existencia de dichos partidos.

El auge de los partidos a principios del siglo XIX cambió el funcionamiento del sistema electoral norteamericano. En lugar de elegir a prohombres del ámbito local como delegados del Colegio Electoral, tal como habían previsto los fundadores, cada estado empezó a escoger a personas leales al partido. Los electores se convirtieron en agentes de los

partidos, lo cual implicó que el Colegio Electoral rindiera su autoridad como mecanismo de cribado a los partidos, en cuyas manos se encuentra desde entonces.

Y fue así como los partidos se convirtieron en los guardianes de la democracia estadounidense. Y puesto que son ellos quienes seleccionan a los candidatos presidenciales, los partidos tienen la capacidad (y, añadiríamos, la responsabilidad) de mantener a las figuras peligrosas fuera de la Casa Blanca. Son ellos quienes deben encontrar un equilibrio entre dos funciones: una función democrática consistente en elegir a los candidatos que representan mejor a los votantes del partido, por un lado, y lo que el politólogo James Ceaser denomina la función de «filtración»,³⁰ consistente en descartar a quienes suponen un desafío para la democracia o son inadecuados para ocupar la presidencia, por el otro.

Este doble imperativo: elegir a un candidato popular y cribar a los demagogos, en ocasiones puede entrañar conflictos. ¿Qué sucede si la población elige a un demagogo? Se trata de una tensión recurrente que ha palpitarido en el corazón del proceso de nominación de candidatos a la presidencia de Estados Unidos desde los tiempos de los fundadores hasta el presente. Confiar en exceso en los mecanismos de cribado es, en sí mismo, antidemocrático, pues puede crear un mundo de jefes de partido que ignoran a sus bases y acaban por no representar al pueblo. No obstante, confiar en exceso en la «voluntad del pueblo» también puede ser peligroso, porque puede desembocar en la elección de un demagogo que suponga una amenaza para la propia democracia. Es imposible escapar a esta tensión. Siempre hay pros y contras.

Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, los partidos políticos priorizaron el cribado por delante de la transparencia. Siempre hubo algún que otro cuarto trasero lleno de humo. A principios de la década de 1800, los candidatos presidenciales los elegían grupos de congresistas en Washington, en un sistema conocido como los caucus* de congresistas. El sistema no tardó en recibir críticas por ser demasiado opaco, de manera que, a principios de la década de 1830, los candidatos empezaron a nominarse en convenciones nacionales de los partidos integradas por delegados procedentes de todos los estados. Los delegados no se elegían por votación popular, sino que su designación corría a cargo de comités locales y estatales de los partidos políticos y, además, no estaban obligados a respaldar a candidatos particulares. Por regla general, seguían las instrucciones de los líderes estatales de los partidos que los enviaban a las convenciones.³¹ De este modo, el sistema favorecía a la gente del partido o a candidatos amparados por la cúpula que controlaba a los delegados. Los candidatos que carecían de apoyos entre la red de políticos estatales y locales de su partido no tenían posibilidad de éxito.

El sistema de convenciones fue criticado por ser opaco y antidemocrático, y no escasearon los intentos de reformarlo. Durante la Era Progresista se introdujeron las elecciones primarias; las primeras se celebraron en Wisconsin en 1901 y, en 1916, se convocaron en dos docenas de estados. Sin embargo, comportaron escasos cambios, en parte porque muchos estados no las aplicaban, pero, principalmente, porque no se exigía a los delegados electos que apoyaran a los candidatos que habían ganado las primarias.³² Seguían actuando «sin compromiso», con libertad para negociar su voto en el salón de convenciones. Los dirigentes del partido, que controlaban los empleos gubernamentales, emolumentos adicionales y otras ventajas, disfrutaban de una posición ventajosa en las negociaciones y, a efectos prácticos,

siguieron siendo los guardianes de la presidencia.³³ Y puesto que las elecciones primarias no tenían una repercusión vinculante en las candidaturas presidenciales, se las consideraba poco más que concursos de belleza. El verdadero poder seguía en manos de las personas del partido o de lo que los coetáneos denominaban «hombres de la organización». Para los candidatos futuribles, asegurarse el respaldo de éstos era la única ruta viable a la candidatura a la presidencia.

El antiguo sistema de convenciones subraya los pros y contras inherentes al sistema de cribado. Por un lado, no era un sistema demasiado democrático, pues no podía afirmarse que los hombres de la organización representaran a la sociedad estadounidense. De hecho, eran la definición misma de una pandilla de «viejos amigos». La mayoría de los miembros de las bases de los partidos, sobre todo los pobres y políticamente desconectados, las mujeres y las minorías, no contaban con representación en aquellos cuartos llenos de humo y, por ende, quedaban excluidos del proceso de nominación presidencial. Por otro lado, el sistema de convenciones era eficaz como guardián por el hecho de cribar y dejar fuera de juego a los candidatos peligrosos. La gente del partido se encargaba de lo que los polítólogos denominaban «evaluar a sus iguales».³⁴ Alcaldes, senadores y congresistas conocían a los candidatos personalmente. Habían trabajado con ellos en condiciones diversas y a lo largo de los años y, en consecuencia, ocupaban una buena posición para evaluar su personalidad, juicio y capacidad de actuar bajo tensión.³⁵ Así pues, aquellas habitaciones llenas de humo servían como mecanismo de cribado y ayudaban a descartar al tipo de demagogos y extremistas que hacían descarrilar la democracia en otras partes del mundo. De hecho, los partidos estadounidenses desempeñaban tan bien su función de cribado que, sencillamente, era imposible que se impusiera ningún candidato independiente. A resultas de ello, la mayoría de ellos ni siquiera intentaban postularse.

Pensemos en Henry Ford, fundador de la empresa automovilística Ford Motor Company. Ford, uno de los hombres más ricos del mundo en los albores del siglo xx, era una versión moderna de la suerte de demagogo extremista contra el cual había advertido Hamilton. Aprovechando su diario *Dearborn Independent* como megáfono, clamaba contra banqueros, judíos y bolcheviques, publicando artículos en los que afirmaba que los intereses bancarios de los judíos conspiraban contra Estados Unidos. Sus opiniones recibieron elogios de racistas de todo el mundo.³⁶ Adolf Hitler lo mencionaba con admiración en *Mein Kampf* y el futuro líder nazi Heinrich Himmler lo describió como «uno de nuestros luchadores más valiosos, importantes e inteligentes».³⁷ En 1938, el Gobierno nazi le otorgó la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana.

Pero Ford también era una persona muy admirada, incluso querida, en Estados Unidos, sobre todo en la región del Medio Oeste.³⁸ Aquel empresario franco, un «muchacho de campo pobre que había logrado prosperar», era reverenciado por muchos estadounidenses del ámbito rural como un héroe tan popular como los presidentes Washington y Lincoln.³⁹

La prepotencia incansable de Ford acabó atrayéndolo a la política. Empezó oponiéndose a la Primera Guerra Mundial mediante el lanzamiento de una «misión de paz» de corte amateur pero de perfil alto en Europa. Entró y salió de la política después de la Gran Guerra: estuvo a punto de conseguir un escaño en el Senado en 1918 y, en 1924, incluso flirteó con la idea de postularse a la presidencia (por el Partido Demócrata). Su propuesta suscitó un rápido entusiasmo, sobre todo en las zonas rurales del país. En 1923 brotaron como setas clubes de apoyo a la presidencia de Ford y la prensa empezó a hablar de la «Fordmania».⁴⁰

Aquel verano, la popular revista *Collier's* puso en marcha un sondeo semanal entre sus lectores a escala nacional, el cual sugería que la fama de Ford, su reputación como empresario perspicaz y la atención infatigable que le dedicaban los medios de comunicación podían traducirse en una candidatura a la presidencia popular. Los resultados semanales recibidos iban acompañados por titulares cada vez más reverenciales: «Caos político conforme aumenta el voto para Ford» o «Ford a la cabeza de la batalla campal por la presidencia». ⁴¹ Al final de aquella encuesta de dos meses de duración entre más de doscientos cincuenta mil lectores, Henry Ford iba a la cabeza de la competición, superando con creces a los doce contrincantes, incluido el presidente del momento, Warren Harding, y el futuro presidente, Herbert Hoover. Con tales resultados, concluían los editores de *Collier's*, «Henry Ford se ha convertido en el tema principal de la política estadounidense». ⁴²

Pero Ford había nacido un siglo antes de tiempo si albergaba serias ambiciones de llegar a la presidencia. Mucho más que la opinión pública importaba la opinión de los líderes del partido, y los líderes del partido lo rechazaban sin remilgos. Una semana después de publicar la encuesta entre sus lectores, en una serie de artículos, incluido uno titulado «Los políticos eligen al presidente», *Collier's* divulgó los resultados de un sondeo realizado entre las personas más influyentes del estamento político, un grupo integrado por 116 dirigentes de ambos partidos, incluidos todos los miembros de los comités nacionales del Partido Demócrata y del Partido Republicano, catorce gobernadores destacados y senadores y congresistas de cada partido. Entre aquellas personas decisivas, Ford aparecía rezagado, en una distante quinta posición. Los editores de *Collier's* observaron aquel otoño:

Cuando se pregunta a los jefes del Partido Demócrata qué piensan de Ford, se encogen de hombros. Prácticamente sin excepción, los hombres que constituyen lo que suele conocerse como la «organización» de cada estado se oponen a Ford. *En todos los estados, salvo en los que celebran primarias presidenciales, estos hombres prácticamente eligen a dedo a los delegados que acuden a las convenciones nacionales.* [...] Nadie niega el entusiasmo que Ford despierta entre las masas, tanto entre demócratas como entre republicanos. Todos los dirigentes demócratas son conscientes de que así ocurre en sus estados, y les atemoriza. Sin embargo, opinan que, debido a la maquinaria de la selección de delegados, es poco probable que Ford dé ninguna sorpresa.⁴³

Pese al entusiasmo popular que suscitaba su candidatura, Ford quedó fuera de combate. El senador James Couzens tildó la idea de su candidatura de ridícula. «¿Cómo puede un hombre de más de sesenta años [...] sin formación ni experiencia aspirar a un cargo así? —se preguntaba—. Es una ridiculez.»⁴⁴

De ahí que no sorprenda que, en la entrevista que concedió a *Collier's* a finales de aquel largo verano, Ford se mostrara templado con respecto a sus ambiciones presidenciales:

A día de hoy, no me imagino aceptando la nominación, aunque quién sabe qué nos depara el mañana. Es posible que estalle una guerra o se produzca alguna crisis de alguna índole que ni el legalismo ni el constitucionalismo sepan resolver y que la nación quiera a una persona capaz de actuar, y de hacerlo con celeridad.⁴⁵

Lo que Ford estaba diciendo, veladamente, es que sólo se plantearía postularse si el sistema de cribado que bloqueaba su camino se eliminaba por algún motivo. De manera que, en realidad, nunca tuvo ninguna posibilidad.

Huey Long no vivió tiempo suficiente para catar las aguas presidenciales, pero, pese a sus extraordinarias habilidades políticas, su popularidad y su ambición, hay

motivos para creer que tampoco habría pasado el filtro de los partidos. Cuando fue elegido al Senado en 1932, su tendencia a saltarse las normas no tardó en aislarlo de sus colegas.⁴⁶ Carente de apoyo entre el liderazgo del Partido Demócrata, Long no habría tenido posibilidad alguna de derrotar a Roosevelt en la convención de 1936. Habría tenido que montar una candidatura presidencial independiente, lo cual habría resultado extraordinariamente difícil. Las encuestas apuntaban que una candidatura de Long podía dividir el voto demócrata y dar la victoria de 1936 a los republicanos, pero que Long en persona tenía pocas opciones de ganar.⁴⁷

Los mecanismos de cribado del partido también permitieron confinar a George Wallace a los márgenes de la política. El gobernador segregacionista participó en diversas primarias demócratas en 1964, donde obtuvo unos resultados sorprendentemente buenos. Con una campaña en contra de los derechos civiles y con el eslogan *Stand Up for America* (en pie por la defensa de Estados Unidos), Wallace conmocionó a los expertos al obtener cerca de un tercio de los votos en Wisconsin e Indiana y anotarse un asombroso 43 por ciento en Maryland.⁴⁸ Pero las primarias importaban poco en 1964 y, en breve, frente a la candidatura inevitable de Lyndon Johnson, Wallace se retiró. En el transcurso de los cuatro años siguientes, empero, Wallace hizo campaña por todo el país anticipándose a la carrera presidencial de 1968. Su combinación de populismo y nacionalismo blanco le granjearon un sólido apoyo entre algunos votantes blancos de clase obrera. En 1968, aproximadamente el 40 por ciento de los estadounidenses lo respaldaba.⁴⁹ En otras palabras, Wallace hizo una campaña parecida a la de Trump en 1968 y contó con unos niveles de apoyo público similares a los de éste.

Pero Wallace operaba en un mundo político distinto. Consciente de que el liderazgo del Partido Demócrata nunca refrendaría su candidatura, se presentó como candidato del

Partido Americano Independiente, lo cual lo condenó al fracaso.⁵⁰ Los resultados de Wallace, un 13,5 por ciento de los votos, fueron destacados para un candidato de una tercera formación, pero lo dejaron muy lejos de la Casa Blanca.

Hoy podemos entender el giro imaginativo de Philip Roth en su novela *La conjura contra América* en toda su magnitud. El fenómeno de Lindbergh no fue un producto surgido enteramente de la imaginación de Roth. Lindbergh, un defensor de la «pureza racial» que recorrió la Alemania nazi en 1936 y fue condecorado con una medalla de honor por Hermann Göring, se erigió como uno de los aislacionistas más destacados de Estados Unidos en 1939 y 1940, años durante los cuales se dedicó a pronunciar discursos por todo el país en nombre del Primer Comité Americano.⁵¹ Y fue extraordinariamente popular. Sus mítines atraían a grandes multitudes y, en 1939, según el entonces editor de *Reader's Digest*, Paul Palmer, sus discursos radiofónicos generaban más correspondencia que los de ninguna otra persona en todo Estados Unidos.⁵² En palabras de un historiador: «La sabiduría popular daba por sentado que Lindbergh acabaría postulándose a la presidencia del país»⁵³ y, en 1939, el senador de Idaho William Borah insinuó que sería un buen candidato presidencial.⁵⁴ Pero aquí es cuando regresamos a la realidad. La convención de 1940 del Partido Republicano no fue ni remotamente parecida a la convención de ficción que se describe en *La conjura contra América*. Lindbergh no sólo no hizo aparición, sino que su nombre ni siquiera se mencionó. Los mecanismos de cribado funcionaron.

En la conclusión de su historia sobre la política de la derecha radical en Estados Unidos, *The Politics of Unreason*, Seymour Martin Lipset y Earl Raab calificaban los partidos norteamericanos como el «principal bastión práctico» frente a los extremistas. Y estaban en lo cierto. Pero Lipset y Raab publicaron su libro en 1970, justo en el momento en el que los partidos se embarcaban en la reforma más drástica de sus

sistemas de nominación en más de un siglo. Todo estaba a punto de cambiar, con consecuencias que superaban todo lo imaginable.

El punto de inflexión fue el año 1968, un año desgarrador para los estadounidenses. El presidente Lyndon Johnson había intensificado la guerra en Vietnam, que se hallaba sumida en una espiral fuera de control: 16.592 norteamericanos fallecieron en Vietnam sólo en 1968, más que en ningún año previo. Cada noche, las familias estadounidenses se sentaban en sus salones a mirar los telenoticias y eran asaltadas en sus sofás por escenas de combate cada vez más explícitas. En abril de 1968, un asesino abatió a tiros a Martin Luther King Jr. Y posteriormente, en junio, a las pocas horas de proclamarse vencedor en las primarias presidenciales del Partido Demócrata en California, la campaña presidencial de Robert F. Kennedy, centrada en oponerse a la intensificación de la guerra de Johnson, conoció un fin abrupto a causa de un segundo asesino armado. Los llantos de desesperación en el salón de bailes del Hotel Ambassador de Los Ángeles aquella noche fueron expresados por el novelista John Updike con las siguientes palabras: «Dios parece haber retirado Su bendición a Estados Unidos».⁵⁵

Entre tanto, los demócratas estaban cada vez más divididos entre los partidarios de la política de Exteriores de Johnson y quienes habían adoptado la postura antibelicista de Robert Kennedy. Tal división quedó ilustrada de un modo especialmente perturbador en la Convención Demócrata de Chicago. Con Kennedy trágicamente desaparecido, la organización tradicional del partido dio un paso al frente para llenar el vacío. Las personas internas al partido que ocupaban una posición dominante en el salón de convenciones se inclinaban por el vicepresidente Hubert Humphrey, pero éste era sumamente impopular entre los

delegados contrarios a la guerra debido a su vinculación con la política del Vietnam del presidente Johnson. Además, Humphrey no se había presentado a ninguna elección primaria. Su campaña, como expresó un colectivo de analistas, se limitaba a «líderes del partido, dirigentes de sindicatos y otros implicados a nivel interno de la organización».⁵⁶ Aun así, con el respaldo de los habituales del partido, incluido el poderoso alcalde de Chicago, Richard Daley, fue elegido candidato en la primera votación.

Humphrey no era el primer candidato presidencial a quien se designaba sin participar en unas primarias. Pero sí sería el último. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Chicago, televisados en las pantallas de todo el país, hirieron de muerte el sistema de selección de candidatos a la presidencia por parte del aparato de los partidos. Incluso antes de dar comienzo la convención, el mazazo decisivo del asesinato de Robert Kennedy, la intensificación del conflicto del Vietnam y la fuerza de los manifestantes contrarios a la guerra concentrados en el Grant Park de Chicago minaron entre la ciudadanía todo resquicio de fe en el viejo sistema. El 28 de agosto, los manifestantes volvieron a concentrarse frente a la convención: policías con cascos azules cargaron contra ellos y contra transeúntes por igual, y hombres, mujeres y niños ensangrentados buscaron refugio en los hoteles cercanos. La llamada Batalla de la Avenida Michigan se propagó a continuación al interior del propio salón de convenciones. El senador Abraham Ribicoff de Connecticut, en su discurso de apoyo a la nominación del candidato contrario a la guerra George McGovern, censuró «las tácticas de la Gestapo» desplegadas por la policía de Chicago, mientras clavaba la mirada, por televisión y en directo, en el alcalde Daley. Al estallar enfrentamientos en el salón de convenciones, agentes de policía uniformados sacaron a rastras de aquel auditorio a varios delegados. Consternado ante tal escena, el presentador de la NBC Chet Huntley

observó: «Seguramente ésta sea la primera vez que un policía haya puesto los pies en un salón de convenciones». A lo que el copresentador, David Brinkley, añadió en tono irónico: «En Estados Unidos». ⁵⁷

La calamidad de Chicago desembocó en una reforma de gran calado. Tras la derrota de Humphrey en las elecciones de 1968, el Partido Demócrata creó la Comisión McGovern-Fraser con el encargo de replantear el sistema de nominaciones. El informe definitivo emitido por la comisión y publicado en 1971 citaba un viejo refrán: «La cura para los males de la democracia es más democracia». ⁵⁸ Con la legitimidad del sistema político en juego, los líderes del partido sentían una intensa presión para hacer más transparente el proceso de nominar a candidatos a la presidencia. ⁵⁹ Según expresó el propio George McGovern: «A menos que se efectúen cambios, la siguiente convención hará que la última parezca un pícnic escolar en domingo». Si no se daba voz verdaderamente a la población, advertía en tono sombrío el informe McGovern-Fraser, ésta acabaría volcándose en la «antipolítica de la calle». ⁶⁰

La Comisión McGovern-Fraser publicó una serie de recomendaciones que ambos partidos adoptaron antes de los comicios de 1972. De todo ello emergió un sistema de primarias presidenciales vinculantes. A partir de 1972, la inmensa mayoría de los delegados, tanto de las convenciones demócratas como de las republicanas, serían elegidos en caucus y primarias a nivel estatal. Los delegados serían preseleccionados por los propios candidatos para garantizar su lealtad. Ello implicaba que, por primera vez, las personas que escogerían a los candidatos a la presidencia de los partidos no tendrían obligaciones con los dirigentes del partido ni tampoco serían libres para cerrar tratos a puerta cerrada durante la convención; en lugar de ello, reflejarían fielmente la voluntad de los votantes de las primarias de su estado. Existían diferencias entre los partidos; a título de

ejemplo, el Partido Demócrata instauró reglas de proporcionalidad en muchos estados y mecanismos para fomentar la representación de las mujeres y las minorías.⁶¹ Aun así, al adoptar unas primarias vinculantes, ambos partidos socavaron sustancialmente la capacidad de decisión de sus dirigentes en el proceso de selección de los candidatos, que quedó abierto a los votantes. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Larry O'Brien, calificó aquellas reformas de «los mejores cambios acontecidos desde el sistema de partidos». George McGovern, que, de manera inesperada, resultó nominado como candidato a la presidencia del país en la convención demócrata de 1972, describió el nuevo sistema de primarias como «el proceso político más transparente de la historia de nuestro país».⁶²

McGovern tenía razón. La senda a la candidatura presidencial ya no tenía que pasar por las élites de los partidos. Por primera vez, era posible eludir los mecanismos de cribado de los partidos... y derrotarlos.

Los demócratas, cuyas primarias iniciales fueron volátiles y provocaron divisiones, dieron marcha atrás a principios de la década de 1980, al estipular que un cupo de los delegados nacionales serían funcionarios electos, a saber: gobernadores, alcaldes de grandes ciudades, senadores y congresistas designados por los partidos estatales, en lugar de escogidos en primarias.⁶³ Estos «superdelegados», que representan entre el 15 y el 20 por ciento de los delegados nacionales, servirían para contrarrestar a los votantes de las primarias y como mecanismo para que los líderes del partido repelieran a los candidatos a quienes desaprobaban. En cambio, los republicanos volaban a gran altura con Ronald Reagan a principios de la década de 1980. El Partido Republicano, que no veía la necesidad de designar a superdelegados, optó, fatídicamente, por mantener un sistema de nominación más democrático.

Algunos polítólogos veían con preocupación el nuevo sistema. Unas primarias vinculantes eran a todas luces más democráticas, pero... ¿podían llegar a ser *demasiado* democráticas? Al colocar las nominaciones presidenciales en manos del electorado, las primarias vinculantes debilitaban la función de cribado de los partidos, eliminaban en potencia la evaluación por parte de los iguales y abrían las puertas a las candidaturas sorpresa. Justo antes de que la Comisión McGovern-Fraser iniciara su trabajo, dos destacados polítólogos advirtieron que las primarias podían «conducir a la aparición de candidatos extremistas y demagogos», quienes, al no estar refrenados por las lealtades al partido, «tienen poco que perder incitando al odio a las masas o realizando promesas vacuas». ⁶⁴

En un principio, tales temores se consideraron exagerados. Ciertamente, aparecieron candidatos sorpresa: el líder defensor de los derechos civiles Jesse Jackson se postuló para la nominación del Partido Demócrata en 1984 y 1988, y el líder baptista sureño Pat Robertson (1988), el comentarista de televisión Pat Buchanan (1992, 1996 y 2000) y el editor de la revista *Forbes* (1996) lo hicieron por el Partido Republicano. Pero todos perdieron.

Resultó que eludir a la élite de los partidos era más fácil en la teoría que en la práctica. Para conseguir una mayoría de delegados era preciso imponerse en las primarias en todo el país, para lo cual, a su vez, se requería dinero, una cobertura en prensa favorable y, algo crucial, gente trabajando sobre el terreno en todos los estados. Cualquier candidato que pretendiera llegar al final de la extenuante carrera de obstáculos que son las primarias de Estados Unidos necesitaba aliados entre donantes, editores de prensa, grupos de intereses, grupos de activistas y políticos de la esfera estatal, como gobernadores, alcaldes, senadores y congresistas.⁶⁵ En 1976, Arthur Hadley describió este arduo proceso como las «primarias invisibles».⁶⁶ Afirmó que esta fase, que antecedía

incluso al comienzo de la campaña de las primarias, era «donde se elegía verdaderamente al candidato ganador».⁶⁷ De ahí que los integrantes del aparato de los partidos —léase: funcionarios electos, activistas y grupos de intereses aliados— no quedaran necesariamente fuera de juego. Sin ellos, argumentaba Hadley, era casi imposible conseguir ser elegido candidato en ninguno de ambos partidos. Y durante un cuarto de siglo, Hadley estuvo en lo cierto.

LA GRAN ABDICACIÓN REPUBLICANA

El 15 de junio de 2015, el constructor y estrella de programas de telerrealidad Donald Trump descendió por una escalera mecánica hasta el vestíbulo de su propio edificio, la Torre Trump, para anunciar que se postulaba a la presidencia de Estados Unidos. A la sazón no era más que otro candidato improbable que creía que su riqueza y su fama podían darle alguna posibilidad o, como mínimo, permitirle ser el centro de atención durante unos cuantos meses. Como Henry Ford, otro empresario, un siglo antes que él, Trump tenía opiniones extremistas: su participación más reciente en la política había sido como «natalista»,^{*} al poner en duda que el presidente Barack Obama hubiera nacido en Estados Unidos. Y los medios de comunicación principales y las personalidades políticas destacadas que se tomaron en serio sus palabras... lo que hicieron fue denunciarlo.

Pero el sistema de las primarias había hecho el proceso de nominación de candidatos a la presidencia más accesible de lo que lo había sido en toda la historia de Estados Unidos. Y esa accesibilidad es siempre una espada de doble filo. En el nuevo contexto, una variedad más extensa de políticos, desde George McGovern hasta Barack Obama, podían competir seriamente por la presidencia del país. Ahora bien, también se había abierto la puerta a candidatos sorpresa, personas que nunca habían ocupado cargos electivos.¹ En los veintitrés años transcurridos entre 1945 y 1968, período en el que imperó el antiguo sistema de convenciones, sólo un

verdadero candidato independiente (Dwight Eisenhower) buscó públicamente la nominación por parte de cualquiera de los partidos. En cambio, durante las dos primeras décadas del sistema de las primarias, entre 1972 y 1992, se postularon ocho candidatos externos (cinco por los demócratas y tres por los republicanos), lo cual representa una media de 1,25 por elección; y entre 1996 y 2016, dieciocho personas ajenas al aparato de los partidos compitieron en alguna elección primaria, lo cual supone una media de tres por elección. Trece de ellas eran republicanas.

El sistema de las primarias posterior a 1972 era especialmente vulnerable a un tipo concreto de candidato independiente: individuos con fama o dinero suficientes para saltarse las «primarias invisibles».² En una palabra: celebridades. Y aunque los candidatos independientes conservadores Pat Robertson, Pat Buchanan y Steve Forbes no lograron superar los efectos de las primarias invisibles durante las décadas de 1980 y 1990, su éxito relativo proporcionó pistas sobre cómo podía hacerse. Forbes, un empresario extraordinariamente rico, logró comprar el reconocimiento de su nombre, mientras que Robertson, un teopredicador evangelista fundador de la cadena televisiva Christian Broadcasting Network, y Buchanan, un comentarista televisivo (y antiguo defensor republicano del nacionalismo blanco), eran en ambos casos figuras pintorescas con amplio acceso a los medios de comunicación. Y si bien ninguno de ellos fue nombrado como candidato a la presidencia, usaron su inmensa riqueza y su fama para postularse.

En cualquier caso, al final, los candidatos sorpresa famosos nunca habían visto cumplidas sus esperanzas. De manera que, en aquella tarde de principios de verano, en el vestíbulo dorado de la Torre Trump, no parecía existir motivo para pensar que en esta ocasión las cosas serían diferentes. Para optar como candidato a la presidencia, Trump tendría

que competir en un intrincado entramado de caucus y elecciones primarias contra otros dieciséis candidatos. Muchos de sus rivales presumían de un currículum similar al que había caracterizado a candidatos con éxito en el pasado. A la cabeza de la manada se hallaba el gobernador de Florida Jeb Bush, hijo y hermano de anteriores presidentes. Y había otros gobernadores, incluidos: Scott Walker, de Wisconsin, Bobby Jindal, de Luisiana, Chris Christie, de Nueva Jersey, y John Kasich, de Ohio, así como varias figuras emergentes republicanas, políticos jóvenes y conocedores de los medios de comunicación como los senadores Marco Rubio y Rand Paul, quienes aspiraban a replicar la vía rápida que había conducido a Barack Obama hasta la Casa Blanca. Texas, el estado natal de tres de los ocho últimos presidentes electos, presentaba a otros dos candidatos: el senador Ted Cruz y el exgobernador Rick Perry. Además de Trump, otros dos independientes presentaron su candidatura: la empresaria Carly Fiorina y el neurocirujano Ben Carson.

Trump ni siquiera soñaba con recibir el apoyo de la élite del partido. No sólo carecía de toda experiencia política, sino que, además, ni siquiera era un republicano de toda la vida. Mientras que Bush, Rubio, Cruz, Christie, Walker y Kasich tenían profundas raíces republicanas, Trump había alternado su inscripción a uno u otro partido en varias ocasiones e incluso había hecho aportaciones a la campaña de Hillary Clinton al Senado.

Incluso después de que Trump empezara a subir como la espuma en las encuestas, pocas personas se tomaron en serio su candidatura. En agosto de 2015, dos meses después de que Trump anunciara que se postulaba para el puesto, los corredores de apuestas de Las Vegas le daban unas posibilidades de cien a una de llegar a la Casa Blanca.³ Y en noviembre de 2015, mientras Trump ocupaba el primer puesto de los sondeos republicanos, Nate Silver, fundador del blog *FiveThirtyEight*, cuyas predicciones misteriosamente

precisas en los comicios de 2008 y 2012 le habían reportado fama y prestigio, escribió un artículo titulado: «Dear Media: Stop Freaking Out about Donald Trump's Poll Numbers» (queridos medios: dejad de alucinar con los resultados en las encuestas de Donald Trump). El artículo predecía que la debilidad de Trump entre las filas del partido sería su sentencia de muerte. Pese a la considerable ventaja de Trump, Silver aseguraba que sus posibilidades de obtener la nominación eran «sensiblemente inferiores al 20 por ciento».⁴

Pero el mundo había cambiado. Los sistemas de cribado de los partidos no eran más que caparazones de lo que habían sido en otros tiempos, principalmente por dos motivos. El primero de ellos era el espectacular aumento de financiación externa disponible, acelerada (aunque no provocada) por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales de 2010.*⁵ A partir de entonces, incluso candidatos presidenciales marginales, como Michele Bachmann, Herman Cain, Howard Dean o Bernie Sanders, podían recaudar grandes sumas de dinero, fuera hallando a un multimillonario que los financiara fuera mediante pequeñas donaciones realizadas a través de internet. La proliferación de candidatos con una correcta financiación indicaba la existencia de un entorno político más abierto y fluido.

El otro factor principal que mermaba el poder de los sistemas de cribado tradicionales era la explosión de medios de comunicación alternativos, en especial agencias de noticias y redes sociales.⁶ Mientras que en el pasado el camino hacia el reconocimiento nacional del nombre de un candidato transitaba por un número reducido de canales generales, los cuales favorecían a los políticos establecidos frente a los recién llegados, el nuevo entorno mediático facilitaba a los personajes famosos convertirse en nombres reconocidos (y granjearse el apoyo de la opinión pública) prácticamente de la

noche a la mañana.⁷ Así ocurría sobre todo en el bando republicano, donde la emergencia de Fox News y de influyentes presentadores de programas de entrevistas radiofónicos (lo que el analista político David Frum denomina el «complejo del entretenimiento conservador»)⁸ radicalizaba al electorado conservador en beneficio de los candidatos con ideologías extremistas.⁹ Ello dio pie a la aparición de fenómenos como Herman Cain, el exdirector ejecutivo de Godfather Pizza y presentador del programa radiofónico que protagonizó un ascenso meteórico al primer puesto de las encuestas republicanas a finales de 2011 antes de que su llama se apagara debido a un escándalo.

Las puertas del proceso de nominación estaban abiertas de par en par. Y si bien las reglas del juego garantizaban en cierta medida que un personaje como Trump tuviera dificultades para triunfar, lo cierto es que ya no podían impedirlo. Era como jugar a la ruleta rusa: las posibilidades de que un candidato independiente extremista llegara a la nominación presidencial eran más elevadas de lo que lo habían sido jamás en la historia.

Aunque muchos factores contribuyeron al sensacional éxito político de Donald Trump, su acceso a la presidencia es, en buena medida, una historia de ineficacia de los filtros de protección.¹⁰ Los sistemas de cribado del partido fallaron en tres momentos clave: las «primarias invisibles», las propias primarias y las elecciones generales.

Trump quedó el último por la cola en las primarias invisibles. Cuando dio comienzo la verdadera temporada de las elecciones primarias, el 1 de febrero de 2016, el día del caucus de Iowa, carecía de apoyos entre los poderes en la sombra republicanos. Tomando como medida el respaldo de gobernadores, senadores y congresistas en el momento del caucus de Iowa, Jeb Bush se impuso en las primarias invisibles

con treinta y un refrendos. Marco Rubio acabó segundo con veintisiete y Ted Cruz finalizó tercero con dieciocho, seguido por Rand Paul, con once. Chris Christie, John Kasich, Mike Huckabee, Scott Walker, Rick Perry y Carly Fiorina obtuvieron más apoyos que Trump.¹¹ El sentido común dictaba, por ende, que la candidatura de Trump estaba condenada al fracaso. Si la historia sirve de pauta, su liderazgo en las encuestas acabaría apagándose de manera inevitable.

Los resultados de Trump en el primer caucus estatal, Iowa (24 por ciento de los votos, una cifra que le concedía el segundo lugar), no alteraron tales expectativas. Al fin y al cabo, los candidatos independientes Pat Robertson (con un 25 por ciento de los votos en 1988), Pat Buchanan (con un 23 por ciento en 1996) y Steve Forbes (con un 31 por ciento en 2000) habían acabado en todos los casos en segundo puesto en Iowa, pero poco después se habían desvanecido.

Y entonces Trump hizo algo que ningún candidato sorpresa había hecho antes: se impuso con facilidad en las primarias subsiguientes en New Hampshire y Carolina del Sur. Aun así, era rechazado por el liderazgo del partido. El día de las primarias de Carolina del Sur, Trump seguía sin contar con ni un solo apoyo de un gobernador, senador o congresista en funciones republicano.¹² Fue después de imponerse en Carolina del Sur cuando consiguió sus primeros respaldos: los congresistas Duncan Hunter (California) y Chris Collins (Nueva York). Ni siquiera al seguir derrotando de manera aplastante a sus rivales republicanos en los colegios electorales Trump consiguió un número de apoyos sustancial. Cuando terminó la temporada de las primarias, contaba con cuarenta y seis votos, menos de un tercio que Marco Rubio y aproximadamente los mismos que Bush había conseguido en su campaña, retirada hacía ya largo tiempo.¹³

Para cuando Trump protagonizó su paseo triunfal hacia la victoria, en las primarias del Supermartes, el 1 de marzo, estaba claro que había dado al traste con las primarias invisibles, convirtiéndolas en algo irrelevante. Sin lugar a dudas, el hecho de ser una celebridad influyó, pero igual de importante fue el cambio de paisaje en el entorno mediático. Desde los albores de la campaña, Trump contó con la simpatía y el apoyo de personalidades mediáticas de derechas como Sean Hannity, Ann Coulter, Mark Levin y Michael Savage, así como del sitio web de noticias Breitbart News, cada vez más influyente.¹⁴ Y aunque inicialmente Trump tuvo una relación conflictiva con Fox News, acabó resultando beneficiado por la polarización del paisaje mediático.

Trump supo encontrar además nuevas maneras de usar los viejos medios de comunicación en sustitución de los apoyos del partido y del gasto tradicional de la campaña electoral.¹⁵ Trump, un «candidato único, con cualidades cortadas por el patrón de la era digital», atrajo cobertura gratuita en los medios generales suscitando polémica.¹⁶ Según un cálculo, las cuentas de Twitter de la MSNBC, la CNN, la CBS y la NBC, cuatro medios a los que nadie podía acusar de inclinación pro-Trump, mencionaron al candidato republicano el doble de veces que a su adversaria en las elecciones generales, Hillary Clinton. De acuerdo con otro estudio, Trump disfrutó de hasta dos mil millones de dólares de cobertura en medios gratuitos durante la temporada de las primarias.¹⁷ Como favorito indiscutible en la cobertura de los medios generales gratuitos e hijo predilecto de gran parte de la red de medios alternativos de derechas, Trump no necesitaba a los poderes en la sombra tradicionales de los republicanos. Los mecanismos de cribado de las primarias invisibles no es que fueran invisibles, es que, en 2016, habían saltado por los aires.

Tras las victorias de Trump en el Supermartes cundió el pánico entre el liderazgo republicano. Gente destacada de dentro del partido y líderes de opinión conservadores empezaron a pronunciarse en contra de Trump. En marzo de 2016, el excandidato a la presidencia republicano Mitt Romney pronunció un discurso de gran repercusión mediática en el Hinckley Institute of Politics en el que describió a Trump como un peligro tanto para el Partido Republicano como para el país. Haciéndose eco del mítico discurso de 1964 de Ronald Reagan «Tiempo para elegir», Romney declaró que Trump era un «fraude» y que «carecía del temperamento y del juicio necesarios para ser presidente». Otras personas respetadas del partido, incluidos el candidato a la presidencia en 2008 John McCain y el senador Lindsey Graham, advirtieron en contra de Trump. Y las principales publicaciones conservadoras, entre ellas *National Review* y *Weekly Standard*, rechazaron a Trump con términos devastadores. Pero el movimiento #NeverTrump fue un perro más ladrador que mordedor. En realidad, el sistema de las primarias había dejado a los líderes republicanos prácticamente sin armas para detener el ascenso de Trump. El aluvión de ataques tuvo escasa repercusión e incluso es posible que jugara a la contra donde más importaba: en las cabinas electorales.

La falta de poder efectivo del liderazgo del partido resultó evidente en la Convención Nacional Republicana de julio de 2016 celebrada en Cleveland. En los días previos a la convención se habló largo y tendido de una votación en tablas y de convencer a delegados comprometidos para que dieran su apoyo a otro candidato. A finales de junio, un grupo denominado Delegates Unbound empezó a emitir por la televisión nacional anuncios en los cuales se informaba a los delegados republicanos de que, en términos estrictos, no estaban legalmente ligados a Trump y los instaban a abandonarlo. Grupos como Free the Delegates, Courageous

Conservatives y Save Our Party lideraron una campaña para que el Panel de Reglas del Comité Nacional Republicano, integrado por 112 miembros, modificara las reglas que vinculaban a los delegados con los candidatos y concediera a los delegados la libertad de voto que habían disfrutado antes de las reformas de 1972. Todos aquellos esfuerzos cayeron en saco roto; de hecho, nunca tuvieron ni la menor oportunidad de materializarse.

Pensar que se le podía arrebatar la nominación a Trump en la convención era hacerse ilusiones vanas. En el sistema vigente, basado en las primarias, los votos confieren una legitimidad que no puede sortearse o ignorarse fácilmente, y Donald Trump contaba con esos votos: casi catorce millones de ellos. Tal como expresó Cindy Costa, integrante del Comité Nacional Republicano por Carolina del Sur, Trump «había ganado en buena lid». Entregar la nominación a otra persona habría desencadenado un «caos sensacional».¹⁸ A los líderes republicanos no les quedó más remedio que afrontar la realidad: ya no tenían las llaves para designar a los candidatos a la presidencia por su partido.

A medida que el campo de batalla se desplazaba hacia las elecciones generales quedó claro que no nos hallábamos ante una carrera presidencial más. Dicho en pocas palabras, Donald Trump no era un candidato normal. No sólo era la persona con menos experiencia que se había postulado para el puesto (salvo en el caso de los generales consagrados, jamás se había elegido a un presidente estadounidense que no hubiera ocupado un cargo electivo o un puesto en un gabinete ministerial), sino que, además, su demagogia, sus opiniones radicales acerca de los inmigrantes y los musulmanes, su voluntad manifiesta de incumplir normas básicas de civismo y sus elogios hacia Vladímir Putin y otros dictadores generaban malestar en gran parte de los medios de comunicación y del

aparato político. ¿Habían designado los republicanos a un dictador en ciernes? Era imposible saberlo a ciencia cierta. Muchos republicanos se aferraban al dicho de que mientras que los críticos de Trump interpretaban sus palabras literalmente, pero no en serio, sus partidarios las interpretaban en serio, pero no literalmente. La retórica de la campaña de Trump, según este planteamiento, eran «meras palabras».

Siempre existe incertidumbre acerca de cómo un político sin un currículum contrastable pueda comportarse una vez ocupe la presidencia, pero, tal como hemos señalado con anterioridad, a los líderes antidemocráticos suele identificárselos antes de que accedan al poder. Trump, incluso antes de estrenarse en el cargo, daba positivo en las cuatro medidas de nuestra prueba decisiva para autócratas.

El primer parámetro es un débil compromiso con las reglas democráticas del juego. Trump dio positivo en esta medida al poner en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral y plantear la insinuación sin precedentes de que podía no aceptar los resultados de los comicios de 2016. Los niveles de fraude electoral en Estados Unidos son ínfimos y, puesto que las elecciones las administran los gobiernos estatales y locales, en la práctica es imposible coordinar el fraude electoral a escala nacional.¹⁹ Pese a ello, durante toda la campaña de 2016, Trump insistió en que se movilizaría a millones de inmigrantes ilegales y a personas fallecidas que continuaban figurando en el censo electoral para que votaran por Clinton.²⁰ Durante meses, el sitio web de su campaña clamaba: «¡Ayudadme a impedir que la deshonesta de Clinton amañe estas elecciones!». ²¹ En agosto, Trump le dijo a Sean Hannity: «Será mejor que nos andemos con cuidado, porque estas elecciones van a estar amañadas. [...] Espero que los republicanos se mantengan vigilantes, porque, de lo contrario, nos las arrebatarán». ²² En octubre tuiteó: «Hay un evidente fraude a gran escala en curso, tanto antes como el

día de las elecciones».²³ Durante el último debate presidencial, Trump rehusó afirmar que aceptaría los resultados de los comicios si perdía.

De acuerdo con el historiador Douglas Brinkley, ningún candidato a la presidencia destacable había proyectado tales dudas sobre el sistema democrático desde 1860. Sólo en el período previo a la guerra de Secesión hubo políticos prominentes que «deslegitimaron el Gobierno federal» de este modo. En palabras de Brinkley: «Estamos ante un motivo secesionista, revolucionario, ante alguien que ha desbaratado el tinglado».²⁴ Las palabras de Trump importaban... y mucho. Un sondeo realizado por Politico/Morning Consult a mediados de octubre reveló que el 41 por ciento de los estadounidenses y el 73 por ciento de los republicanos creían que podían robarle las elecciones a Trump.²⁵ En otras palabras, tres de cada cuatro republicanos habían dejado de estar seguros de vivir en un sistema democrático con elecciones libres.

La segunda categoría en nuestra prueba decisiva es negar la legitimidad de los adversarios. Los políticos autoritarios venden la visión de que sus contrincantes son delincuentes subversivos y antipatrióticos o bien constituyen una amenaza para la seguridad nacional o para el estilo de vida existente. Trump cumplía también este criterio. Para empezar, había demostrado ser un «natalista» al poner en entredicho la legitimidad de Barack Obama como presidente sugiriendo que Obama había nacido en Kenia y era musulmán, cosa que muchos de los partidarios de Trump equiparaban a «no ser estadounidense».²⁶ Durante la campaña de 2016, Trump negó la legitimidad de Hillary Clinton como adversaria calificándola de «delincuente» y declarando en repetidas ocasiones que «merecía estar en la cárcel».²⁷ En los mítines de campaña aplaudía a sus partidarios cuando coreaban: «¡Enciérrala!».

El tercer criterio es la tolerancia o el aliento de la violencia. La violencia partidista a menudo es el preámbulo de una quiebra democrática. Entre los ejemplos más destacados figuran los «camisas negras» en Italia, los «camisas pardas» en Alemania, la aparición de guerrillas de izquierdas en Uruguay y el ascenso de los grupos paramilitares de ala izquierdista en el Brasil de principios de los años sesenta del siglo xx. En el último siglo, ningún candidato a la presidencia de ningún partido importante había respaldado nunca la violencia (George Wallace lo hizo en 1968, pero era el candidato de una tercera formación). Trump rompió este patrón. Durante la campaña, no sólo toleró la violencia entre sus partidarios, sino que en ocasiones pareció regodearse en ella. En una transgresión radical de las normas del civismo, Trump acogió con los brazos abiertos (e incluso jaleó) a algunos de sus partidarios que atacaron físicamente a manifestantes. Se ofreció a pagar los gastos legales de uno de sus votantes después de que éste diera un golpe a traición y amenazara de muerte a un manifestante en un mitin en Fayetteville, Carolina del Norte.²⁸ En otras ocasiones, respondió a los manifestantes de sus mítines exhortando a sus partidarios a cometer actos violentos. He aquí algunos ejemplos, recopilados por Vox.²⁹

Si veis a alguien a punto de arrojar un tomate, derribadlo de un puñetazo, ¿de acuerdo? Lo digo en serio. Dadle bien fuerte. Os prometo que yo correré con las tasas legales. Os lo prometo. (1 de febrero de 2016, Iowa)

Ojalá el mundo fuera como antes. ¿Sabéis qué solían hacerles a los tipos como ése cuando estaban en un lugar como éste? Los sacaban de aquí en camilla, amigos. Es cierto. [...] Me encantaría darle un puñetazo en la cara, de verdad. (22 de febrero de 2016, Nevada)

En los buenos tiempos, lo arrancarían de esa silla sin pensárselo dos veces. Pero hoy todo el mundo es tan políticamente correcto... Nuestro país se va al garete por ser políticamente correcto. (26 de febrero de 2016, Oklahoma)

Largo de aquí. ¡Largo! ¡Fuera! Esto es fascinante. ¡Qué divertido! Me encanta. ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos! Venga, sacadlo de aquí. Intentad no hacerle daño. Si se lo hacéis, yo os defenderé ante los tribunales, no os preocupéis. [...] Cuatro de los nuestros se le echaron encima, saltaron sobre él y lo zarandearon. Al día siguiente la prensa nos puso a parir: que éramos demasiado duros, dijo. Anda ya. Que me dejen en paz un rato. Estamos hartos de ser políticamente correctos. ¿A que sí, amigos? (4 de marzo de 2016, Míchigan)

Había varios tipos duros como los que hay hoy aquí y empezaron a devolver los golpes. Fue muy bonito. Se liaron a puñetazos. En los buenos tiempos, esto no sucedía, porque los trataban con mucha, mucha dureza. ¿Y sabéis qué? Que antes de volver a protestar se lo pensaban dos veces. Pero hoy entran, levantan la mano y señalan con el dedo a quien no deben, y se les consiente todo porque nos hemos vuelto débiles. (9 de marzo de 2016, Carolina del Norte)

En agosto de 2016, Trump apoyó veladamente la violencia contra Hillary Clinton al decirles a los asistentes a un mitin en Wilmington, Carolina del Norte, que si Clinton designaba a algún nuevo miembro del Tribunal Supremo podía redundar en que se aboliera el derecho a portar armas. Y se atrevió a añadir: «Si le corresponde a ella elegir a los jueces, no habrá nada que hacer, amigos. [...] Aunque la Segunda Enmienda, gente..., quizás sí se pueda, no lo sé».³⁰

La última señal de advertencia es la predisposición a restringir las libertades civiles de rivales y críticos. Si algo diferencia a los autócratas actuales de los líderes democráticos es su intolerancia ante las críticas y su predisposición a utilizar dicho poder para castigar a aquellas personas, ya sean de la oposición, de los medios de comunicación o de la sociedad civil, que los critiquen. Donald

Trump demostró tal propensión en 2016. Para empezar, afirmó que tenía previsto nombrar un fiscal especial para que investigara a Hillary Clinton tras las elecciones y declaró que Clinton debería ser encarcelada.³¹ Y además, Trump amenazó en repetidas ocasiones con castigar a los medios de comunicación hostiles. En un mitin en Fort Worth, Texas, por ejemplo, arremetió contra el dueño del *Washington Post*, Jeff Bezos, al declarar: «Si me convierto en presidente, tendrán problemas. ¡Y tanto que los tendrán!». ³² Afirmando que los periodistas se contaban «entre los grupos de personas más deshonestos que he conocido nunca», Trump declaró:

Voy a proponer nuevas leyes contra la difamación para que, cuando escriben de manera deliberada artículos negativos, horribles y falsos, podamos demandarlos y ganar mucho dinero. [...] Para que cuando el *New York Times* publique una exclusiva, lo cual es una desgracia absoluta, o cuando el *Washington Post* [...] publique una exclusiva, podamos demandarlos...³³

Con la excepción de Richard Nixon, ningún candidato presidencial de uno de los dos partidos principales reunió ni siquiera uno de estos cuatro criterios en todo el siglo pasado. Tal como demuestra la tabla 2, Donald Trump los reúne todos. Ningún otro candidato presidencial importante de la historia moderna de Estados Unidos, ni siquiera Nixon, ha demostrado en público un compromiso tan endebil con los derechos constitucionales y las normas democráticas. Trump era precisamente el tipo de figura que tanto temían Hamilton y otros fundadores cuando concibieron la presidencia de Estados Unidos.

TABLA 2
Donald Trump y los cuatro indicadores clave
de un comportamiento autoritario

	¿Rechazan la Constitución o expresan su voluntad de no acatarla?
--	--

<p>1. Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego.</p>	<p>¿Sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas, como cancelar elecciones, incumplir o suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir los derechos políticos o civiles básicos?</p> <p>¿Pretenden usar (o aprueban el uso de) medidas extraconstitucionales para cambiar el Gobierno, como golpes militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio en el Gobierno?</p> <p>¿Intentan socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo negándose a aceptar unos resultados electorales creíbles?</p>
<p>2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos.</p>	<p>¿Describen a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional establecido?</p> <p>¿Afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante?</p> <p>¿Describen sin argumentos a sus rivales de otros partidos como delincuentes cuyo supuesto incumplimiento de la ley (o potencial para incumplirla) los descalifica para participar de manera plena en la esfera política?</p> <p>¿Sugieren de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros que trabajan secretamente en alianza con (o a sueldo de) un Gobierno foráneo, normalmente de un país enemigo?</p>
<p>3. Tolerancia o fomento de la violencia.</p>	<p>¿Tienen lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas ilegales?</p> <p>¿Han patrocinado ellos mismos o sus aliados de partido linchamientos a adversarios?</p> <p>¿Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades?</p> <p>¿Han elogiado (o se han negado a condenar) otros actos destacados de violencia política, tanto pasados como acontecidos en otros lugares del mundo?</p>
<p>4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la</p>	<p>¿Han apoyado leyes o políticas que restringen las libertades civiles, como ampliar las leyes por libelo o difamación o aprobar leyes que limitan el derecho de manifestación, las críticas al Gobierno o a determinadas organizaciones civiles o políticas?</p>

<p>oposición, incluidos los medios de comunicación.</p>	<p>¿Han amenazado con adoptar medidas legales u otras acciones punitivas contra personas críticas pertenecientes a partidos de la oposición, la sociedad civil o los medios de comunicación?</p>
	<p>¿Han elogiado medidas represivas adoptadas por otros Gobiernos, ya sea en el pasado o en otros lugares del mundo?</p>

Todo ello debería haber disparado las alarmas. El proceso de las primarias no había logrado desempeñar su función de cribado y había permitido que un hombre no preparado para el cargo se postulara como candidato por uno de los principales partidos. Pero ¿cómo podían reaccionar los republicanos a aquellas alturas? Recuérdense las lecciones aprendidas de las quiebras democráticas en la Europa de la década de 1930 y en Sudamérica en las décadas de 1960 y 1970: cuando los mecanismos de cribado fracasan, el estamento político debe hacer todo cuanto esté en su mano por mantener a las figuras peligrosas alejadas de los centros de poder.

La abdicación colectiva, la transferencia de la autoridad a un líder que amenaza la democracia, suele estar provocada por dos causas. La primera es la creencia errónea en que es posible controlar o domar a una persona autoritaria. La segunda es lo que el sociólogo Ivan Ermakoff denomina «connivencia ideológica»,³⁴ con acuerdo a la cual el programa de la persona autoritaria se solapa lo suficiente con el de los políticos del sistema como para que la abdicación resulte deseable o, al menos, preferible a las alternativas. Ahora bien, cuando lo que se tiene delante es a un déspota en potencia, la élite política debe rechazarlo sin ambigüedades y hacer todo lo posible por defender las instituciones, aunque ello implique aunar temporalmente fuerzas con sus adversarios más acérrimos.³⁵

Con las elecciones generales de 2016 cerniéndose sobre ellos, los republicanos eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo y de sus implicaciones. Si Trump amenazaba los principios democráticos básicos, tenían que detenerlo. Hacer otra cosa equivaldría a poner en riesgo la democracia, y perder la democracia es mucho peor que perder unas elecciones. La situación obligaba a hacer algo para muchos inconcebible: respaldar a Hillary Clinton como candidata a la presidencia. El sistema de Estados Unidos es bipartidista: sólo dos candidatos tenían la posibilidad de ganar las elecciones de 2016, y uno de ellos era un demagogo. Los republicanos afrontaban una prueba de coraje político. ¿Se sacrificarían políticamente a corto plazo por el bien del país?

Tal como hemos indicado anteriormente, hay un precedente para tal comportamiento. En 2016, los conservadores austriacos respaldaron al candidato del Partido Verde, Alexander Van der Bellen, para evitar la elección de Norbert Hofer, un radical de extrema derecha. Y, en 2017, el candidato conservador francés derrotado, François Fillon, solicitó a sus correligionarios que votaran por el candidato de centroizquierda Emmanuel Macron para evitar que la aspirante de extrema derecha Marine Le Pen alcanzara el poder.³⁶ En ambos casos, políticos de derechas dieron su apoyo a rivales ideológicos, enojando a gran parte de las bases de sus partidos, pero redireccionando al electorado en número suficiente como para frenar el acceso de extremistas al poder.

Y, en efecto, hubo republicanos que dieron su apoyo a Hillary Clinton amparándose en el argumento de que la inadecuación de Donald Trump para el puesto al que concurría era peligrosa. Como sus homólogos conservadores austriacos y franceses, consideraron de vital importancia

aparcar sus intereses partidistas en pro de un compromiso compartido con la democracia. He aquí lo que dijeron tres de ellos:

Republicano 1: «Nuestra elección en estas elecciones no podría ser más clara: Hillary Clinton es una firme defensora de los intereses de la democracia estadounidense. [...] Donald Trump es un peligro para nuestra democracia».³⁷

Republicano 2: «Es hora [...] de poner el país por delante del partido y votar por la secretaria Clinton. Trump es demasiado peligroso y no está capacitado para ocupar el despacho más importante del país».³⁸

Republicano 3: «Estamos ante un asunto grave y no malgastaré mi voto en un candidato de protesta. Puesto que el futuro del país puede depender de impedir que Donald Trump sea declarado presidente, este noviembre la votaré a ella [Clinton], e insto a los republicanos a secundar mi decisión».³⁹

De haber realizado tales declaraciones el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y el expresidente George W. Bush o, quizá, un trío de senadores destacados, como John McCain, Marco Rubio y Ted Cruz, el curso de las elecciones de 2016 podría haber sido muy distinto. Por desgracia, salieron de boca de William Pierce, ex secretario de prensa de la senadora de Maine jubilada Olympia Snowe (republicano 1); Jack McGregor, un exsenador por Pensilvania (republicano 2), y Rick Stoddard, un banquero republicano de Denver (republicano 3).⁴⁰

Figuras republicanas clave a escala nacional como Paul Ryan, Mitch McConnell, Marco Rubio y Ted Cruz respaldaron a Donald Trump. Las únicas personalidades republicanas con cierta prominencia que apoyaron a Hillary Clinton fueron políticos retirados o antiguos funcionarios gubernamentales, personas que no planeaban competir en futuras elecciones y

que, políticamente, no tenían nada que perder. La víspera de los comicios, el *Washington Post* publicó una lista de 78 republicanos que respaldaban públicamente a Clinton.⁴¹ Sólo uno de ellos, el congresista Richard Hanna por Nueva York, era un cargo electo... y estaba a punto de retirarse. No figuraba en la lista ningún gobernador republicano, ni ningún senador. Y sólo un congresista (a punto de jubilarse).

Un puñado de dirigentes republicanos en activo, incluidos los senadores McCain, Mark Kirk, Susan Collins, Kelly Ayotte, Mike Lee, Lisa Murkowski y Ben Sasse, los gobernadores John Kasich y Charlie Baker, y los exgobernadores Jeb Bush y Mitt Romney, rehusaron dar su apoyo a Trump. El expresidente George W. Bush guardó silencio. Sin embargo, ninguno de ellos se mostró dispuesto a respaldar a Clinton.

En resumen, la mayoría de los dirigentes republicanos acabaron acatando la línea del partido. Si hubieran roto de forma inequívoca con Trump y hubieran explicado a los estadounidenses de manera clara y explícita que éste suponía una amenaza para las instituciones tanpreciadas de la democracia del país y si, partiendo de esa base, hubieran apoyado a Hillary Clinton, es posible que Donald Trump no hubiera alcanzado nunca la presidencia. En Francia, se calcula que la mitad de los votantes del partido Los Republicanos del conservador François Fillon se sumaron a su sorprendente apoyo a Macron y en torno a un tercio se abstuvieron, de tal modo que sólo una sexta parte de los votantes de Fillon apoyaron a Le Pen, lo cual posiblemente fuera clave en el resultado de los comicios del país.⁴² Es imposible saber cómo se habría dividido el voto de los votantes republicanos en Estados Unidos. Posiblemente, parte de las bases, quizás incluso la mayoría, hubiera votado a Trump. Pero una parte sustancial también habría oscilado ante la imagen de dos partidos unidos para certificar la derrota de Trump.

Por desgracia, ocurrió algo muy distinto. Pese a sus titubeos y contradicciones, la mayoría de los líderes republicanos cerraron filas tras Trump y transmitieron la imagen de un partido unido. Y, a su vez, eso normalizó las elecciones. En lugar de vivirse como un momento crítico, los comicios se convirtieron en una competición estándar entre dos partidos, con los republicanos dando su apoyo al candidato republicano y los demócratas a la candidata demócrata.

Y ese cambio tuvo consecuencias de calado. Una vez que las elecciones se convirtieron en una contienda normal por la presidencia, fue como lanzar una moneda al aire, por dos motivos. En primer lugar, la intensificación de la polarización partidista había endurecido al electorado en el pasado reciente. El país no sólo estaba cada vez más claramente dividido entre republicanos y demócratas, con realmente pocos votantes independientes o indecisos, sino que, además, los republicanos y demócratas cada vez demostraban una mayor lealtad a su partido... y una mayor hostilidad hacia el partido rival.⁴³ El electorado se había vuelto menos móvil, lo cual hacía menos probable conseguir una victoria por mayoría abrumadora, como las vividas en 1964 o 1972. Al margen de quiénes fueran los candidatos en la década de 2000, las elecciones presidenciales serían unos comicios reñidos.

En segundo lugar, dada la inestabilidad económica y los mediocres índices de aprobación del presidente Obama, prácticamente todas las previsiones de las ciencias políticas anticipaban unas elecciones ajustadas. La mayoría de ellas vaticinaban una victoria por la mínima de Clinton en el voto popular, pero también había algunas que concedían esa victoria por un margen estrecho a Trump. En cualquier caso, todos los modelos concordaban en que se trataría de una carrera reñida.⁴⁴ Y cuando el resultado de unas elecciones se lanza al aire, la moneda puede caer por cualquiera de las dos

caras. Depende de contingencias, de los acontecimientos. En este contexto, las «sorpresa de octubre» pudieron tener mucho peso. Así, un vídeo antiguo aparecido de la nada que pintaba a uno de los candidatos bajo una luz negativa o una carta del director del FBI que proyectaba dudas sobre la fiabilidad de la otra candidata pudieron ser determinantes.

Si los líderes republicanos se hubieran opuesto públicamente a Trump, la dinámica de una contienda ajustada entre rojos y azules de las cuatro elecciones previas se habría visto perturbada. El electorado republicano se habría dividido: parte de él habría hecho caso de las advertencias del liderazgo del partido mientras que la otra parte habría continuado brindando su apoyo a Trump. Y aun así, para derrotar a Trump sólo habría sido preciso que una diminuta fracción de los votantes republicanos cambiara de filas. En lugar de ello, las elecciones se normalizaron. La carrera fue cada vez más reñida. Y Trump ganó.

LA SUBVERSIÓN DE LA DEMOCRACIA

El peruano Alberto Fujimori no tenía previsto convertirse en un dictador. Ni siquiera tenía previsto ser presidente del país. Fujimori, un rector de universidad de ascendencia japonesa poco conocido, había anhelado ocupar un escaño en el Senado en 1990, pero, al no conseguir que ningún partido lo designara, creó el suyo propio y lo hizo él mismo.¹ Con escasa financiación, presentó su candidatura a la carrera presidencial con el fin de atraer publicidad para su campaña hacia el Senado.² Pero 1990 fue un año de una crisis aguda. La economía peruana había caído presa de la hiperinflación y un grupo de guerrilla maoísta llamado Sendero Luminoso cuya brutal insurgencia había segado miles de vidas desde su aparición en 1980 andaba cercando Lima, la capital del país. Los peruanos se sentían defraudados por los partidos establecidos. A modo de protesta, muchos de ellos dieron su apoyo a un don nadie político cuyo eslogan de campaña era «Un presidente como tú». De manera imprevisible, Fujimori subió como la espuma en las encuestas y sacudió el panorama político peruano quedando segundo y clasificándose para una segunda vuelta, con Mario Vargas Llosa, el novelista más célebre del país, como contrincante. Los peruanos admiraban a Vargas Llosa, que más adelante recibió el Premio Nobel de Literatura. Prácticamente todo el estamento político, mediático y empresarial daba su apoyo a Vargas Llosa, pero los peruanos de a pie lo consideraban demasiado afín a las élites, que parecían prestar oídos sordos a sus

preocupaciones. Muchos vieron en Fujimori, cuyo discurso populista explotaba ese enojo, la única opción real de cambio. Y Fujimori ganó.

En su discurso inaugural, Fujimori advirtió que Perú afrontaba «la crisis más profunda de su historia como república». La economía, afirmó, se hallaba «al borde del colapso» y la sociedad peruana había quedado «rota por la violencia, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico». Fujimori se comprometió a «sacar [a Perú] de la situación en la que se encontraba y a guiarlo hacia un destino mejor». Estaba convencido de que el país necesitaba reformas económicas drásticas y combatir con más vigor el terrorismo. Pero sólo tenía una idea vaga de cómo lograr tales objetivos.³

Y, además, se enfrentaba a obstáculos desmoralizantes. En tanto que recién llegado a la política, Fujimori tenía pocas amistades entre los poderes en la sombra tradicionales de Perú. Los partidos de la oposición controlaban el Congreso y personas designadas por ellos componían el Tribunal Supremo. Los medios de comunicación tradicionales, muchos de los cuales habían respaldado a Vargas Llosa, desconfiaban de él. Fujimori había sido implacable en sus ataques a la élite política, a la cual había descrito como una oligarquía corrupta que estaba llevando el país a la ruina.⁴ Y ahora se encontraba con que aquellos a quienes había atacado y derrotado durante la campaña seguían controlando muchos de los resortes del poder.

Fujimori afrontó un principio difícil. El Congreso no aprobó ninguna ley durante sus primeros meses en el cargo y los tribunales no parecían estar preparados para responder a la amenaza terrorista creciente.⁵ Fujimori no sólo carecía de experiencia en los entresijos de la política legislativa, sino que, para más inri, carecía de paciencia para lidiar con ellos.⁶ Tal como expresó uno de sus ayudantes, Fujimori «no soportaba la idea de invitar al presidente del Senado al palacio presidencial cada vez que quería que el Congreso

aprobara una ley».⁷ Prefería, tal como él mismo se jactaba en ocasiones de hacer, gobernar Perú solo... desde su ordenador portátil.

De manera que, en lugar de negociar con los congresistas, Fujimori arremetió contra ellos, calificándolos de «charlatanes improductivos».⁸ Tildó a los jueces no colaboradores de «chacales» y «sinvergüenzas».⁹ Y algo más preocupante si cabe: comenzó a saltarse al Congreso y a aprobar decretos ejecutivos.¹⁰ Los funcionarios gubernamentales empezaron a quejarse de que la Constitución peruana era «rígida» y «confinadora», lo cual no hizo sino acrecentar los temores del endeble compromiso de Fujimori con las instituciones democráticas.¹¹ En un discurso ante empresarios de primer orden, Fujimori preguntó: «¿Vivimos realmente en una democracia? [...] Me cuesta afirmar que sí. Somos un país que, en realidad, siempre ha estado gobernado por minorías poderosas, por oligopolios, camarillas, grupos de presión [...].»¹²

Alarmado, el poder establecido lo obligó a retroceder. Cuando Fujimori se saltó los tribunales y liberó a miles de presos condenados por delitos menores con el fin de dejar espacio para encarcelar a terroristas, la Asociación Nacional de Jueces lo acusó de «autoritarismo antidemocrático inaceptable». Es más, los tribunales declararon inconstitucionales varios de los decretos de Fujimori. Al poco, sus críticos lo calificaban de «déspero» de manera rutinaria y los medios de comunicación empezaron a retratarlo como un emperador japonés.¹³ A principios de 1991 se hablaba de destituirlo. En marzo, la revista *Caretas* publicó en portada una imagen de Fujimori en el punto de mira de un rifle con la pregunta: «¿Es posible derrocar a Fujimori? Algunos ya estudian la Constitución».¹⁴ Sintiéndose asediado, Fujimori dobló la apuesta. En un discurso pronunciado ante líderes empresariales, declaró: «No voy a detenerme hasta haber demolido todos los tabúes que quedan. Van a caer uno a uno.

Seremos triplemente audaces derribando los viejos muros que separan este país del progreso». En noviembre de 1991 sometió un mamotrético paquete de 126 decretos a la aprobación del Congreso. Contenía decretos de gran alcance, algunos de los cuales incluían medidas antiterroristas que amenazaban las libertades civiles. El Congreso puso reparos. No sólo revocó o diluyó varios de los decretos más importantes, sino que aprobó una legislación que restringía el poder de Fujimori. El conflicto se agravó. Fujimori acusó al Congreso de estar controlado por narcotraficantes y, en respuesta a ello, el Senado aprobó una moción para «desalojar» la presidencia debido a la «incapacidad moral» de Fujimori. Si bien la moción no obtuvo, por poco, votos suficientes en la Cámara de Diputados, el conflicto había alcanzado tal tensión que un funcionario gubernamental expresó, preocupado, que «o el Congreso mata al presidente o el presidente mata al Congreso».¹⁵

Y fue el presidente quien mató al Congreso. El 5 de abril de 1992, Fujimori apareció en televisión y anunció que disolvía el Congreso y la Constitución. Menos de dos años después de su elección por sorpresa, el desconocido improbable se había convertido en un tirano.

Si bien algunos demagogos electos asumen el poder con un plan autócrata, no ocurre así en el caso de muchos otros, como Fujimori. La quiebra democrática no requiere un plan de acción previo. En lugar de ello, tal como demuestra la experiencia de Perú, puede ser el resultado de una secuencia de hechos no anticipados, un tira y afloja cada vez más tenso entre un líder democrático que infringe las normas y una clase política dirigente que se siente amenazada.

El proceso suele empezar con meras palabras. Los demagogos atacan a sus críticos con términos severos y provocadores, tratándolos como enemigos, como elementos

subversivos e incluso como terroristas. La primera vez que se postuló a la presidencia, Hugo Chávez describió a sus adversarios como «cerdos rancios» y «oligarcas escuálidos»;¹⁶ ya como presidente, calificó a sus críticos de «enemigos» y «traidores».¹⁷ Fujimori vinculó a sus rivales con el terrorismo y el narcotráfico. Y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi acusó de «comunistas» a los jueces que dictaron sentencias en su contra.¹⁸ También la prensa se convierte en diana. El presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó a los medios de «grave enemigo político que hay que derrotar»¹⁹ y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan culpó a los periodistas de propagar el «terrorismo».²⁰ Tales ataques pueden tener consecuencias: si la opinión pública acaba por compartir la visión de que la oposición tiene vínculos con el terrorismo y la prensa difunde mentiras, resulta más fácil justificar la adopción de medidas contra ellos.

Y el asalto rara vez concluye ahí. Por más que los observadores a menudo aseguren que, en el caso de los demagogos, «por la boca muere el pez» y que no hay que tomarse en serio todo lo que dicen, un vistazo a los líderes demagogos de todo el mundo sugiere que muchos de ellos acaban por cruzar la línea que separa las palabras de la acción. Y ello ocurre porque el auge al poder inicial del demagogo tiende a polarizar a la sociedad, creando un clima de pánico, hostilidad y desconfianza mutua. Las palabras amenazantes del nuevo dirigente con frecuencia tienen un efecto bumerán. Si los medios de comunicación se sienten amenazados, pueden abandonar la contención y los estándares profesionales en un intento desesperado por debilitar al Gobierno. Y la oposición puede concluir que, por el bien del país, hay que destituir al Gobierno mediante medidas extremas: proceso de destitución, manifestaciones masivas o incluso un golpe de Estado.

Cuando Juan Perón fue elegido presidente por vez primera en Argentina en 1946, muchos de sus adversarios lo consideraban un fascista. Miembros de la Unión Cívica Radical, quienes creían estar «luchando contra el nazismo», boicotearon la investidura de Perón. Desde el primer día de la presidencia de Perón, sus rivales en el Congreso adoptaron una estrategia de «oposición, obstrucción y provocación» e incluso solicitaron al Tribunal Supremo que asumiera el control del Estado.²¹ En la misma línea, la oposición venezolana solicitó a la Corte Suprema que designara a un equipo de psiquiatras para determinar si Chávez podía ser destituido del cargo alegando «incapacidad mental».²² Diarios y canales de televisión destacados respaldaron estrategias extraconstitucionales para derrocarlo. Como es previsible, las personas potencialmente autoritarias interpretan estos ataques como una grave amenaza y, en consecuencia, se vuelven más hostiles.

Ahora bien, existe otro motivo por el que dan este paso: la democracia es un trabajo extenuante. Mientras que los negocios familiares y los escuadrones militares se rigen «por real decreto», las democracias exigen negociación, compromiso y concesiones. Los reveses son inevitables y las victorias siempre parciales. Las iniciativas presidenciales pueden perecer en el Congreso o quedar bloqueadas en los tribunales. Y si bien estas limitaciones frustran a todos los políticos, los demócratas saben que no les queda más remedio que aceptarlas y son especialmente duchos capeando el aluvión incesante de críticas. En cambio, para los recién llegados, sobre todo para aquéllos con tendencia a la demagogia, la política democrática resulta con frecuencia intolerablemente frustrante. El sistema de mecanismos de control y equilibrio se les antoja una suerte de camisa de fuerza. Como en el caso del presidente Fujimori, que era incapaz de tragarse con la idea de almorzar con los líderes del Senado cada vez que perseguía la aprobación de una ley, los

dictadores en potencia tienen poca paciencia para la política de la democracia en el día a día. Y como Fujimori, quieren desembarazarse de ella.

¿Cómo hacen añicos las instituciones democráticas que supuestamente los limitan las personas autoritarias elegidas para el Gobierno? Algunas lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso y la prensa independiente sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo a pasitos diminutos. Cada uno de esos pasos, por separado, se antoja insignificante: ninguno de ellos parece amenazar realmente la democracia. De hecho, los movimientos del Gobierno para subvertirla suelen estar dotados de una pátina de legalidad: o bien los aprueba el Parlamento o bien el Tribunal Supremo garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, garantizar la «limpieza» de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional.

Para entender mejor cómo los autócratas electos socavan sutilmente las instituciones resulta útil imaginar un partido de fútbol. Para consolidar el poder, los déspotas en potencia deben apresar a los árbitros, marginar al menos a uno de los jugadores estrella del rival y reescribir las reglas del juego de manera que funcionen en su propio beneficio, lo que vendría a ser inclinar el terreno de juego en contra del equipo contrario.

Siempre va bien tener a los árbitros de parte de uno. Los Estados modernos poseen varios organismos autorizados a investigar y penalizar las irregularidades cometidas tanto por los funcionarios públicos como por los ciudadanos. Entre éstos figuran el sistema judicial, los organismos que velan por el cumplimiento de la ley, los servicios de inteligencia, las agencias tributarias y los organismos reguladores. En las democracias, tales instituciones están diseñadas para funcionar como árbitros neutrales. Para los autócratas en potencia, por ende, estos organismos judiciales y de seguridad del Estado suponen a un tiempo un desafío y una oportunidad. Si mantienen la independencia, pueden poner al descubierto y castigar los abusos del Gobierno. Al fin y al cabo, la función de un árbitro es prevenir las estafas. Pero si el control de tales organismos queda en manos de personas leales, pueden servir para los objetivos del autócrata en potencia y proteger al Gobierno frente a investigaciones o demandas legales que podrían conducir a su revocación del poder. El presidente puede infringir la ley, amenazar los derechos de la ciudadanía e incluso saltarse la Constitución sin tener que preocuparse por que tales excesos sean investigados o censurados. Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad.

Apesar a los árbitros proporciona al Gobierno algo más que un escudo: le ofrece una poderosa arma que le permite aplicar la ley de manera selectiva y castigar a los adversarios al tiempo que protege a sus aliados. Las autoridades tributarias pueden emplearse para atacar a políticos, empresas y medios de comunicación de la oposición. La policía puede tomar medidas energéticas contra las manifestaciones de la oposición al tiempo que tolera actos de violencia perpetrados por matones favorables al Gobierno. Y

las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas con el Gobierno y desenterrar material para chantajearlas.

Con frecuencia, ese apoderamiento de los árbitros se lleva a cabo despidiendo discretamente a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por personas leales. En Hungría, por ejemplo, el primer ministro, Viktor Orbán, llenó la Fiscalía, la Oficina Estatal de Auditoría, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Oficina Estadística Central y el Tribunal Constitucional, todos ellos teóricamente independientes, de aliados de su partido tras recuperar el poder en 2010.²³

Las instituciones que no resultan fáciles de purgar pueden secuestrarse, de manera sutil, por otros medios. Pocas personas han superado en este sentido al «asesor en inteligencia» de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Bajo la dirección de Montesinos, el Servicio de Inteligencia Nacional de Perú grabó en cinta de vídeo a centenares de políticos de la oposición, congresistas, empresarios, periodistas y editores pagando o recibiendo sobornos, entrando en burdeles o participando en alguna otra actividad ilegal, y luego utilizó las grabaciones para chantajearlos.²⁴ Además, mantuvo en nómina a tres jueces del Tribunal Supremo, dos miembros del Tribunal Constitucional y a una cifra «pasmosa» de jueces y fiscales, a quienes realizaba pagos en efectivo mensuales en sus viviendas.²⁵ Todo ello se hizo en secreto; en la superficie, el sistema judicial de Perú funcionaba como cualquier otro. Pero, entre bambalinas, Montesinos ayudaba a Fujimori a consolidar su poder.

Y a los jueces que no se dejan comprar puede acusárselos de prevaricación. Cuando Perón asumió la presidencia en 1946, cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo de Argentina eran adversarios conservadores y uno de ellos lo había llamado «fascista».²⁶ Preocupados por el historial de dicho tribunal fulminando legislación prolaborista, los aliados

de Perón en el Congreso acusaron de prevaricación a tres de aquellos magistrados por malversación de fondos (y un cuarto dimitió antes de ser acusado).²⁷ Entonces Perón designó a cuatro letrados leales y el tribunal no volvió a ponerle pegas nunca.²⁸ En la misma línea, cuando el Tribunal Constitucional de Perú amenazó con bloquear que el presidente Fujimori pudiera presentarse como candidato para un tercer mandato en 1997, los aliados de Fujimori en el Congreso acusaron de prevaricación a tres de los siete jueces del órgano, alegando que, al declarar «inconstitucional» el intento de Fujimori de eludir los límites al mandato presidencial establecidos por la Constitución, ellos mismos habían vulnerado la carta magna.²⁹

Los gobiernos que no logran eliminar a los jueces independientes pueden sortearlos plagando los tribunales de letrados afines. En Hungría, por ejemplo, el Gobierno de Orbán amplió el tamaño de la Corte Constitucional de ocho a quince magistrados, cambió las reglas de su nombramiento de manera que el partido gobernante, el Fidesz, pudiera designar por sí solo a nuevos letrados, y luego llenó las vacantes con jueces fieles al Fidesz.³⁰ En Polonia, el partido gobernante, Ley y Justicia, vio cómo varias de sus iniciativas eran bloqueadas por el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en materia constitucional del país, entre 2005 y 2007. Cuando el partido volvió a hacerse con el poder en 2015, adoptó medidas para evitar pérdidas similares en el futuro. Por aquél entonces, había dos vacantes en el Tribunal Constitucional, integrado por quince letrados, y tres jueces habían sido aprobados por el Parlamento saliente pero aún tenían que jurar el cargo. En un movimiento de constitucionalidad dudosa, el nuevo Gobierno de Ley y Justicia se negó a que dichos jueces juraran el cargo y, en su lugar, designó a cinco nuevos magistrados de su cuerda.³¹ Y, por si acaso, luego aprobó una ley que exigía que todas las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional contaran

con una mayoría de dos tercios. A efectos prácticos, esto confería a los aliados del Gobierno derecho a voto en el seno del tribunal y limitaba la capacidad del organismo para servir como mecanismo de control independiente del poder ejecutivo.³²

La estrategia más extrema de apresar a los árbitros consiste en arrasar los tribunales y sustituirlos por unos nuevos. En 1999, el Gobierno de Chávez convocó elecciones para una Asamblea Constituyente que, incumpliendo una sentencia anterior del Tribunal Supremo, se otorgó el poder de disolver las demás instituciones estatales, incluyendo al propio tribunal. Temeroso por su supervivencia, el Tribunal Supremo aceptó el movimiento y lo calificó de constitucional.³³ La presidenta del Tribunal Supremo, Cecilia Sosa, dimitió, declarando que el tribunal «se había suicidado para evitar ser asesinado. Pero el resultado es el mismo: ha muerto».³⁴ Dos meses más tarde, el Tribunal Supremo fue disuelto y reemplazado por un nuevo Tribunal Supremo de Justicia.³⁵ Pero ni siquiera eso bastó para garantizar una judicatura dócil, de manera que, en 2004, el Gobierno de Chávez amplió de tamaño el Tribunal Supremo, que pasó de tener veinte a treinta y dos magistrados y llenó las vacantes de «revolucionarios» leales.³⁶ Y problema resuelto. En el transcurso de los nueve años siguientes, el Tribunal Supremo no emitió ni una sola sentencia en contra del Gobierno.³⁷

En cada uno de estos casos, los árbitros del partido democrático acabaron situándose del bando del Gobierno y proporcionando al beneficiado un escudo frente a los desafíos constitucionales y un arma potente (y «legal») con la que atacar a sus adversarios.

Una vez los árbitros van a remolque, los autócratas electos pueden desviar su atención hacia sus adversarios. La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rastro de

disidencia, como hizo Mussolini en la Italia fascista o Fidel Castro en la Cuba comunista. Pero algunas sí se esfuerzan por asegurarse de que actores clave (cualquiera capaz de causar un daño real al Gobierno) queden marginados, resulten perjudicados o sean sobornados para seguir el juego. Entre estos actores clave pueden figurar desde políticos de la oposición hasta empresarios que financian a los partidos rivales, grandes medios de comunicación y, en algunos casos, figuras religiosas o de otra índole cultural que disfruten de integridad moral entre la opinión pública.

El modo más sencillo de lidiar con los adversarios potenciales es comprarlos. La mayoría de los autócratas electos empiezan por ofrecer puestos políticos, empresariales o mediáticos destacados, favores, ventajas o, directamente, sobornos a cambio de su apoyo o, al menos, de su silencio y su neutralidad. Los medios de comunicación colaboradores pueden obtener un acceso privilegiado al presidente, mientras que los empresarios amigables pueden recibir provechosas concesiones o contratos del Gobierno. El Gobierno de Fujimori fue un maestro comprando a sus críticos, sobre todo a la prensa. Hacia finales de la década de 1990, todos los canales televisivos principales, varios diarios y tabloides populares figuraban en nómina del Gobierno. Vladimiro Montesinos pagó a los propietarios del Canal 4 en torno a doce millones de dólares a cambio de firmar un «contrato» que otorgaba a Montesinos el control sobre la programación de los telediarios de la cadena.³⁸ El principal accionista de Canal 5 recibió nueve millones de dólares de manos de Montesinos y el accionista mayoritario de Canal 9 recibió cincuenta mil dólares a cambio de despedir a dos reputados periodistas de investigación. En una conversación grabada en vídeo a finales de 1999, Montesinos declaró que los jefes de las cadenas de televisión estaban «todos alineados.

[...] Les hicimos firmar documentos y todo. [...] Los tenemos a todos formando fila. Cada día me reúno con ellos a las 12:30 [...] y planificamos las noticias de la noche».³⁹

Las figuras destacadas de los medios de comunicación fueron quienes recibieron los sobornos más cuantiosos de manos de Montesinos, quien no se abstuvo de comprar también a políticos. En 1998, cuando grupos de la oposición reunieron firmas suficientes para forzar un referéndum sobre si Fujimori podía presentarse a la reelección en 2000, el tema se planteó ante el Congreso, donde, por ley, requería el apoyo de un 40 por ciento de la asamblea legislativa. En teoría, la oposición contaba con los cuarenta y ocho votos necesarios para aprobar el referéndum. Pero Montesinos sobornó a tres diputados para que se abstuvieran de acudir a la Cámara a votar. Uno de ellos, Luis Chu, recibió, en un apartamento, un pago de ciento treinta mil dólares estadounidenses procedente de un fondo para sobornos de la agencia de inteligencia estatal; otro, Miguel Ciccia, obtuvo ayuda en un caso legal que implicaba a una de sus empresas, y la tercera, Susy Díaz, accedió a quedarse en casa alegando «motivos personales».⁴⁰ La votación no consiguió los apoyos suficientes, cosa que permitió a Fujimori postularse (y ganar) para un tercer mandato ilegal en 2000. Y cuando el electorado no dio a Fujimori la mayoría en el Congreso, Montesinos sobornó a dieciocho diputados de la oposición para que cambiaron de bando.

A los actores que no es posible comprar hay que debilitarlos por otros medios. Mientras que los dictadores de la vieja escuela solían encarcelar, enviar al exilio o incluso asesinar a sus adversarios, los autócratas contemporáneos tienden a ocultar su represión tras una apariencia de legalidad. De ahí que hacerse con el control de los árbitros sea tan importante. Bajo Perón, el líder de la oposición, Ricardo Balbín, fue encarcelado por «faltarle al respeto» al presidente durante una campaña electoral. Balbín apeló al Tribunal

Supremo, pero, como Perón lo había llenado de jueces afines, no tenía posibilidad alguna de ganar el recurso.⁴¹ En Malasia, el primer ministro Mahathir Mohamad utilizó una fuerza policial políticamente leal y llenó la judicatura de personas afines para investigar, arrestar y encarcelar a su principal adversario, Anwar Ibrahim, acusado de sodomía a finales de la década de 1990.⁴² En Venezuela, el líder de la oposición, Leopoldo López, fue arrestado y acusado de «incitar a la violencia» durante una oleada de protestas antigubernamentales en 2014. Los funcionarios del Gobierno no proporcionaron prueba alguna de tal incitación y, en un momento dado, llegaron a señalar que había sido «subliminal».⁴³

Los gobiernos pueden usar también su control de los árbitros para marginar «legalmente» a los medios de comunicación de la oposición, a menudo mediante demandas de libelo y difamación. El presidente ecuatoriano Rafael Correa lo hizo de manera magistral: en 2011 ganó una impresionante demanda por difamación, con una indemnización de cuarenta millones de dólares, contra los propietarios y el editor de uno de los grandes diarios del país, *El Universo*, por publicar un editorial en el que lo calificaban de «dictador». Correa aseguró que aquel caso era un «gran paso adelante para la liberación de América de uno de los poderes más importantes y más impunes: los medios de comunicación corruptos». Posteriormente indultó a los propietarios del diario, pero la demanda tuvo un imperioso efecto disuasorio en la prensa.⁴⁴

Los gobiernos de Erdogan y Putin también manejaron la ley con una eficacia devastadora. En Turquía, una de las principales víctimas fue el poderoso conglomerado de medios de comunicación Doğan Yayın, que controlaba en torno al 50 por ciento del mercado de los medios turco, incluido el diario más leído en el país, el *Hurriyat*, y varias cadenas de televisión. Muchos medios de difusión amparados bajo el

grupo Doğan eran laicos y liberales, cosa que los enfrentaba al Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco). En 2009, el Gobierno contraatacó multando a Doğan con casi dos mil quinientos millones de dólares (cifra que prácticamente superaba el valor neto total de la empresa) por evasión de impuestos. Mutilado, Doğan se vio obligado a vender gran parte de su imperio, incluidos dos grandes diarios y un canal de televisión. Los adquirieron empresarios favorables al Gobierno.⁴⁵ En Rusia, después de que la cadena de televisión independiente NTV, perteneciente a Vladímir Gusinsky, se ganara la reputación de ser «un grano en el culo», el Gobierno de Putin abalanzó a las autoridades tributarias sobre Gusinsky, a quien arrestaron por «malversación de fondos».⁴⁶ Se ofreció a Gusinsky «un pacto sacado de una película mala de la mafia: renunciar a la NTV a cambio de la libertad».⁴⁷ Aceptó el pacto, entregó NTV al gigante energético controlado por el Gobierno, Gazprom, y huyó del país.⁴⁸ En Venezuela, el Gobierno de Chávez lanzó una investigación sobre las irregularidades financieras cometidas por el propietario de la cadena de televisión Globovisión, Guillermo Zuloaga, que huyó del país para evitar ser arrestado. Bajo una intensa presión financiera, Zuloaga acabó por vender Globovisión a un empresario afín al Gobierno.⁴⁹

A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura. Cuando el Gobierno de Chávez subió de tono sus ataques mediada la década de 2000, una de las principales cadenas televisivas del país, Venevisión, decidió dejar de cubrir temas políticos. Los programas de tertulia de las mañanas fueron reemplazados por programas de astrología y las series sustituyeron a los telediarios vespertinos. Venevisión, que antaño había sido considerada una cadena favorable a la oposición, apenas le

dio espacio durante las elecciones de 2006 y otorgó al presidente Chávez el quíntuple de cobertura que a sus contendientes.⁵⁰

Los autócratas electos también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición. Tal fue una de las claves para la consolidación del poder de Putin en Rusia. En julio de 2000, cuando hacía menos de tres meses que había accedido a la presidencia, Putin convocó a veintiuno de los empresarios más ricos de Rusia en el Kremlin, donde les comunicó que serían libres de hacer dinero bajo su supervisión... siempre que se mantuvieran al margen de la política.⁵¹ La mayoría de los denominados oligarcas tomaron buena nota de su advertencia. Pero el multimillonario Borís Berezovski, el accionista mayoritario del canal televisivo ORT, no lo hizo. Cuando ORT se manifestó crítica con el Gobierno, éste reavivó un caso por fraude caído en el saco del olvido y ordenó arrestar a Berezovski. Berezovski huyó al exilio, dejando sus activos mediáticos en manos de su socio más joven, quien los «puso amablemente a disposición de Putin». Otro oligarca que desatendió la advertencia de Putin fue Mijaíl Jodorkovski, dueño del gigante del petróleo Yukos. Jodorkovski, el hombre más rico de Rusia (con una riqueza que asciende a quince mil millones de dólares estadounidenses, según *Forbes*), era considerado alguien intocable. Pero se confió demasiado. Jodorkovski, un liberal a quien desagradaba Putin, empezó a financiar de manera dadivosa a los partidos de la oposición, incluido el prooccidentalista Yabloko. En un momento dado, hasta cien miembros de la Duma (el Parlamento ruso) acataban su mandato. Corría el rumor de que pretendía postularse a la presidencia. Sintiéndose amenazado, Putin hizo arrestar a Jodorkovski en 2003 por evasión de impuestos, desfalco y fraude.⁵² Jodorkovski permaneció en prisión casi una década. El mensaje a los oligarcas era claro: «Manteneos al margen de

la política». Casi todos lo hicieron. Despojados de recursos, los partidos de la oposición se debilitaron, muchos de ellos hasta extinguirse.⁵³

El Gobierno de Erdogan también empujó al empresariado hacia los márgenes de la política. Cuando el Partido Joven (GP por sus siglas en turco), fundado y financiado por el millonario magnate Cem Uzan, se postuló como un rival serio en 2004, las autoridades financieras asediaron al imperio empresarial de Uzan y lo acusaron de crimen organizado.⁵⁴ Uzan huyó a Francia y, al poco, el GP se vino abajo. Pocos años después, el grupo Koc, el mayor conglomerado industrial de Turquía, fue acusado de colaborar con las manifestaciones masivas de 2013 en el parque Gezi (se usó un hotel propiedad de Koc situado cerca del parque como refugio y hospital improvisado en medio de la represión policial). Aquel año, funcionarios de hacienda auditaron varias empresas de Koc y cancelaron un gigantesco contrato del Ministerio de Defensa con una filial.⁵⁵ La familia Koc aprendió la lección. A partir de 2013 mantuvo las distancias con la oposición.

Por último, los autócratas electos a menudo intentan silenciar a figuras culturales (artistas, intelectuales, cantantes, deportistas...) cuya popularidad o reputación moral los convierte en amenazas en potencia. Cuando el ícono literario argentino Jorge Luis Borges emergió como un crítico de perfil alto de Perón (otro escritor describió a Borges como una «suerte de anti-Perón»), funcionarios gubernamentales hicieron que lo transfirieran de su empleo en una biblioteca municipal a lo que Borges describió como un «puesto de inspector de gallinas y conejos».⁵⁶ Borges renunció a su empleo y no consiguió hallar otro durante meses.

No obstante, por norma general, los Gobiernos prefieren nombrar a figuras culturales populares o alcanzar un acuerdo con ellas y les permiten continuar con su labor siempre que se mantengan al margen de la política. El venezolano Gustavo Dudamel, el director de la Orquesta Sinfónica Bolivariana y de

la Filarmónica de Los Ángeles, famoso internacionalmente, es un ejemplo de ello. Dudamel era un destacado defensor de El Sistema, el programa educativo musical de Venezuela, famoso en todo el mundo, que beneficia a centenares de miles de jóvenes venezolanos con ingresos bajos. Dado que El Sistema depende de la financiación estatal, sus fundadores mantuvieron una neutralidad política estricta. Dudamel dio continuidad a esta práctica, negándose a criticar al Gobierno de Chávez pese a su autoritarismo creciente. Dudamel dirigió la Orquesta Sinfónica Bolivariana en el funeral de Chávez en 2012, e incluso en 2015, cuando las principales personalidades de la oposición se hallaban encarceladas, escribió un editorial para el *Los Angeles Times* en el que defendía su neutralidad y declaraba su «respeto» hacia el Gobierno de Maduro. A cambio, El Sistema obtuvo un incremento de la financiación gubernamental, cosa que le permitió llegar a setecientos mil niños en 2015, frente a los quinientos mil de tres años antes.⁵⁷ No obstante, las cosas cambiaron en mayo de 2017, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a un joven violinista, un alumno de El Sistema, durante una manifestación contraria al Gobierno. Entonces Dudamel rompió su silencio político y publicó un editorial en el *New York Times* condenando la represión gubernamental y la deriva hacia la dictadura de Venezuela.⁵⁸ Y pagó un precio por ello: al mes siguiente, el Gobierno canceló la gira prevista de su Joven Orquesta Nacional por Estados Unidos.⁵⁹

El silenciamiento de voces influyentes, sea por aquiescencia o, si es preciso, mediante el acoso, puede tener potentes consecuencias para la oposición al régimen. Cuando se encarcela a empresarios poderosos o se los arruina económicamente, como en el caso de Jodorkovski en Rusia, otras personas del ámbito concluyen que les conviene mantenerse alejadas de la política. Y cuando se arresta a políticos de la oposición o éstos se exilian, como en el caso de Venezuela, otros políticos deciden tirar la toalla y retirarse.

Muchos disidentes optan por permanecer en sus casas en lugar de participar en política, y quienes se mantienen activos se desmoralizan cada vez más. Ése es precisamente el objetivo del Gobierno. Una vez los actores clave de la oposición, los medios de comunicación y el empresariado se han vendido o marginado, la oposición se desinfla. Y el Gobierno «gana» sin vulnerar necesariamente las reglas.

No obstante, para atrincherarse en el poder, los Gobiernos deben hacer algo más: deben cambiar también las reglas del juego. Los autócratas que pretenden consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución, el sistema electoral y otras instituciones de modos que resultan desfavorables o debilitan a la oposición, inclinando de nuevo el terreno de juego en contra de sus rivales. Estas reformas suelen llevarse a cabo bajo el pretexto de hacer un bien público, cuando en realidad lo que se persigue es favorecer a quienes ostentan el poder. Y puesto que conllevan cambios legales e incluso constitucionales, pueden permitir a los autócratas bloquear dichos beneficios durante años o incluso décadas. Pongamos por ejemplo Malasia, donde el sistema electoral tradicional estaba cortado a medida del partido gobernante, el UMNO, un partido con un electorado predominantemente malayo. Aunque los malayos constituían poco más de la mitad de la población, los distritos parlamentarios se dividían de manera favorable, de tal modo que el 70 por ciento correspondieran a una mayoría malaya, lo cual permitía al UMNO y sus aliados obtener mayorías parlamentarias abrumadoras.⁶⁰ Sin embargo, esta situación cambió cuando el Partido Islámico Malayo (PAS) emergió como la principal formación de la oposición en el país en las postrimerías de la década de 1990. El PAS era también un partido con un electorado mayoritariamente malayo. De manera que, en 2002, las autoridades electorales, dominadas por el UMNO, invirtieron

la normalidad y acometieron un proceso de redistribución de los distritos que, desafiando las tendencias demográficas, reducía el número de escaños parlamentarios en las zonas rurales, consideradas los bastiones del PAS.⁶¹ Esa partición favorable ayudó a la coalición liderada por el UMNO a imponerse con un asombroso 91 por ciento de los escaños electorales en los comicios de 2004.

El Gobierno de Orbán, en Hungría, hizo algo similar. Tras vencer con una mayoría parlamentaria de dos tercios en 2010, el partido gobernante, el Fidesz, utilizó su supermayoría para volver a redactar la Constitución y las leyes electorales y bloquearlas a su favor. Adoptó nuevas reglas electorales con respecto a las mayorías que favorecían al partido principal (Fidesz) y dividió el país en distritos electorales que le comportaran el máximo número de escaños. Por último, prohibió la publicidad electoral en medios de comunicación privados y limitó las campañas en televisión al canal de radiodifusión público, dirigido por personas leales al Fidesz.⁶² La consecuencia de estas nuevas ventajas institucionales resultó evidente en las elecciones parlamentarias de 2014: pese al hecho de que el porcentaje de votos del Fidesz cayó sensiblemente, de un 53 por ciento en 2010 a un 44,5 por ciento en 2014, el partido gobernante consiguió conservar su mayoría por dos tercios.⁶³

Quizá el ejemplo más destacado de reescritura de las reglas del juego en beneficio de un autócrata lo tengamos en Estados Unidos. El final de la reconstrucción tras la guerra de Secesión, en la década de 1870, desembocó en la aparición de regímenes autoritarios unipartidistas en todos los estados posconfederados.⁶⁴ El régimen unipartidista no era ninguna casualidad histórica benévolas, sino más bien el producto de una ingeniería constitucional antidemocrática flagrante.

Durante la época de la reconstrucción del país, la concesión del derecho al voto masiva a los afroamericanos planteó una grave amenaza al control político de los blancos

en el Sur y al predominio del Partido Demócrata. Con acuerdo a la Ley de Reconstrucción de 1867 y a la Quinta Enmienda, que prohibía limitar el sufragio en función de la raza, los afroamericanos se convirtieron de la noche a la mañana en el electorado mayoritario en Misisipi, Carolina del Sur y Luisiana, y casi mayoritario en Alabama, Florida, Georgia y Carolina del Norte.⁶⁵ Tropas federales supervisaron el registro masivo de votantes negros en todo el Sur.⁶⁶ En el conjunto del país, el porcentaje de hombres negros con derecho a voto aumentó de un 0,5 por ciento en 1866 a un 80,5 por ciento dos años más tarde. En muchos estados del Sur, las tasas de registro de población negra superaron el 90 por ciento.⁶⁷ Y los ciudadanos negros votaron. En las elecciones presidenciales de 1880, la participación de población negra fue como mínimo de un 65 por ciento en Carolina del Sur y del Norte, Tennessee, Texas y Virginia.⁶⁸ La concesión del derecho a voto otorgó poder a los afroamericanos: más de dos mil libertos sureños accedieron a un cargo electivo en la década de 1870, incluidos catorce congresistas y dos senadores estadounidenses. En un momento dado, más del 40 por ciento de los legisladores de las cámaras inferiores de Luisiana y Carolina del Sur eran negros.⁶⁹ Y puesto que el voto afroamericano era abrumadoramente republicano, la concesión del sufragio a los negros dio un nuevo ímpetu a los republicanos y a otros partidos que desafiaban al hasta entonces omnipotente Partido Demócrata.⁷⁰ Los demócratas perdieron el poder en Carolina del Norte, Tennessee y Virginia en las décadas de 1880 y 1890, y estuvieron a punto de perderlo en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Misisipi y Texas.⁷¹ Si hubieran continuado celebrándose elecciones democráticas, observó el politólogo V. O. Key, «habría sido letal para el estatus de la población blanca del cinturón negro».⁷²

De manera que cambiaron las reglas... y dieron al traste con la democracia. «Denos una convención [constitucional] y la arreglaré para que [...] los negros nunca tengan voz», declaró el exsenador de Georgia Robert Toombs cuando la época de la reconstrucción se aproximaba a su fin.⁷³ Entre 1885 y 1908, los once estados posconfederados sin excepción reformaron sus constituciones y leyes electorales para privar del derecho al voto a los afroamericanos.⁷⁴ Para cumplir la ley escrita, tal como estipula la Quinta Enmienda, no podía hacerse mención alguna a la raza en los intentos por restringir el derecho al voto, de manera que los estados introdujeron impuestos de capitación supuestamente «neutrales», requisitos de propiedades, pruebas básicas de lectura y escritura y papeletas de voto con una redacción compleja.⁷⁵ «El objetivo general de todas aquellas restricciones —observó el historiador Alex Keyssar— era mantener las urnas fuera del alcance de los negros pobres y analfabetos.»⁷⁶ Y puesto que los afroamericanos eran en su inmensa mayoría republicanos, era previsible que retirarles el sufragio restaurara el predominio electoral de los demócratas. El objetivo, tal como expresó un senador estatal de Carolina del Norte, era redactar «una ley justa y honesta que siempre dará una mayoría holgada a los demócratas».⁷⁷

Carolina del Sur, cuya población era mayoritariamente negra, fue la pionera en restringir el voto. La Eight Box Law o Ley de las Ocho Urnas* de 1882 creaba una papeleta de voto compleja que prácticamente imposibilitaba a las personas analfabetas ejercer el derecho al sufragio y, como la mayoría de los habitantes negros del estado no sabían leer ni escribir, la participación negra en las elecciones se desplomó.⁷⁸ Pero no acabó ahí la cosa. En 1888, el gobernador John Richardson declaró: «Ahora gobierna una minoría de cuatrocientos mil votos [blancos] por encima de una mayoría de seiscientos mil votos [negros]. [...] Lo único que a día de hoy se interpone entre nosotros y el mandato de los negros es un estatuto

endeble: la Eight Box Law».⁷⁹ Siete años más tarde, un estado aprobó un impuesto de capitación y una prueba básica de lectura y escritura. La participación negra en las elecciones, que había alcanzado un 96 por ciento en 1876, cayó a sólo un 11 por ciento en 1898.⁸⁰ Privar del voto a los negros «hundió al Partido Republicano», que permaneció fuera de la Cámara de Representantes durante casi un siglo.⁸¹

En Tennessee, el sufragio negro convirtió a los republicanos en una competencia tal en 1888 que la revista prodemócrata *Avalanche* vaticinó «una abrumadora victoria republicana» en los siguientes comicios a menos que se pusieran medios para impedirlo.⁸² Un año más tarde, los legisladores demócratas aprobaron un impuesto de capitación, estrictos requisitos a los registros de inscripción y la Ley Dortch, mediante la cual se creaba una papeleta de votación compleja que requería saber leer y escribir. Mientras la asamblea legislativa debatía, *Avalanche* proclamaba: «O aprobamos la Ley Dortch o estamos muertos». Después de aprobada, el titular del *Memphis Daily Appeal* rezaba: «Al fin a salvo: adiós, republicanos, adiós». Los demócratas obtuvieron una victoria aplastante en 1890, mientras que los republicanos se «derrumbaron». En un editorial, el *Daily Appeal* informaba de que las consecuencias de la Ley Dortch eran «de lo más admirables. El voto se había recortado triste y maravillosamente, desde luego, pero la proporción de las mayorías democráticas cuando menos se había cuadruplicado». En 1896, la participación de la población negra en las elecciones fue casi nula.

En Alabama, donde los demócratas estuvieron a punto de perder el Gobierno a manos de un populista en 1892, «implantaron restricciones al sufragio para eludir tales dificultades».⁸³ Después de que la asamblea legislativa estatal aprobara una ley que suprimía el sufragio negro, se dice que el gobernador Thomas Jones afirmó: «Traedme esa ley rápido, para que la firme cuanto antes, no vaya a ser que se me

paralicen la mano o el brazo, porque borra del mapa para siempre a los [populistas] [...] y a todos los negros».⁸⁴ La historia se repitió en Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Texas y Virginia.

Estas medidas «reformistas» liquidaron a todos los efectos la democracia en el Sur de Estados Unidos. Aunque los afroamericanos constituían una mayoría o una casi mayoría de la población en muchos estados, e incluso a pesar de que el sufragio negro quedaba consagrado en la Constitución, se aplicaron medidas «legales» o aparentemente neutrales para «garantizar que el electorado sureño [...] fuera en su mayoría blanco».⁸⁵ La participación negra en el Sur se desplomó del 61 por ciento en 1880 a sólo el 2 por ciento en 1912.⁸⁶ La privación del derecho al voto de los afroamericanos eliminó del panorama al Partido Republicano y bloqueó la supremacía blanca y el gobierno unipartidista durante casi un siglo. Tal como observó un negro sureño: «Todo el Sur, todos los estados sureños, están en manos de los mismos hombres que nos tenían esclavizados».⁸⁷

Capturando a los árbitros, comprando o debilitando a los opositores y reescribiendo las reglas del juego, los dirigentes electos pueden establecer una ventaja decisiva (y permanente) frente a sus adversarios. Y dado que estas medidas se llevan a cabo de manera paulatina y bajo una aparente legalidad, la deriva hacia el autoritarismo no siempre hace saltar las alarmas. La ciudadanía suele tardar en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, aunque ello suceda a ojos vistos.

Una de las grandes ironías de por qué mueren las democracias es que la defensa en sí de la democracia suele esgrimirse como pretexto para su subversión. Los autócratas en potencia suelen usar las crisis económicas, los desastres naturales y, sobre todo, las amenazas a la seguridad (sean

guerras, insurgencias armadas o atentados terroristas) para justificar la adopción de medidas antidemocráticas. En 1969, tras imponerse en la reelección para su segundo y último mandato, el presidente filipino Ferdinand Marcos empezó a plantearse cómo usar una situación de emergencia para mantener más tiempo en su cargo.⁸⁸ Marcos no quería apartarse cuando concluyera su segundo mandato en 1973, tal como dictaba la Constitución, de manera que urdió planes para declarar la ley marcial y reescribir la carta magna. Pero necesitaba una justificación, y se le presentó una oportunidad en julio de 1972, cuando una serie de misteriosos estallidos de bombas sacudieron Manila. Tras el aparente intento de asesinato del ministro de Defensa Juan Ponce Enrile, Marcos, culpando de éste a terroristas comunistas, ejecutó su plan. Anunció la ley marcial en la televisión nacional, insistiendo en tono agorero: «Compatriotas [...] esto no es un golpe militar». Defendió que «un Gobierno democrático no es un Gobierno indefenso» y que la Constitución, la misma que estaba suspendiendo, «proporcionaba sabiamente los medios de protección» para enfrentarse a un peligro como una insurrección.⁸⁹ Con aquel movimiento, Marcos se instaló cómodamente en el Gobierno durante los siguientes catorce años. Las crisis son difíciles de predecir, pero sus consecuencias políticas no. Propician la concentración y, con mucha frecuencia, el abuso del poder. Las guerras y los atentados terroristas producen un efecto de «unirse bajo la bandera»⁹⁰ como parte del cual aumenta el apoyo al Gobierno (a menudo de manera espectacular); en la estela del 11 de Septiembre, el índice de aprobación del presidente Bush se disparó de un 53 a un 90 por ciento, la cifra más elevada registrada jamás por un sondeo Gallup.⁹¹ (El récord previo, un 89 por ciento, lo había obtenido el padre de Bush, George H. W. Bush, tras la Primera Guerra del Golfo de 1991.) Y dado que pocos políticos se atreven a enfrentarse a un presidente con un 90 por ciento de apoyo en medio de una crisis de

seguridad nacional, esos presidentes prácticamente no se someten a control alguno. La Ley USA PATRIOT, firmada por George W. Bush en octubre de 2001, no se habría aprobado nunca si un mes antes no se hubieran producido los atentados del 11-S.

También es más probable que la ciudadanía tolere (e incluso respalde) medidas autoritarias durante las crisis de seguridad, sobre todo cuando temen por su propia protección.⁹² En la estela de los atentados del 11-S,⁹³ el 55 por ciento de los estadounidenses encuestados afirmaron que consideraban necesario renunciar a ciertas libertades civiles para frenar el terrorismo, frente al 29 por ciento de 1997.⁹⁴ En la misma línea, la confinación en campos de internamiento de los estadounidenses japoneses ordenada por Roosevelt habría sido inconcebible sin el temor público generado por el ataque a Pearl Harbor. Después de Pearl Harbor, más del 60 por ciento de los estadounidenses encuestados apoyaban expulsar a los estadounidenses japoneses del país y, un año después, el internamiento de este segmento de la población seguía contando con un respaldo público considerable.⁹⁵

La mayoría de las constituciones contemplan la ampliación del poder durante las situaciones de excepcionalidad.⁹⁶ A resultas de ello, incluso los presidentes elegidos de manera democrática pueden concentrar fácilmente el poder y amenazar las libertades civiles durante la guerra. En manos de un dictador en potencia, este poder concentrado deviene mucho más peligroso. Para un demagogo que se siente asediado por las críticas y cautivo de las instituciones democráticas, las crisis abren una ventana de oportunidad para silenciar a la crítica y debilitar a sus rivales. De hecho, los autócratas electos a menudo «necesitan» crisis, puesto que las amenazas externas les brindan la posibilidad de zafarse de sus «cadenas» de manera rápida y, muy a menudo, «legal».

La combinación de un autócrata en potencia y una grave crisis puede, por ende, ser letal para la democracia. Algunos dirigentes acceden al cargo teniendo que afrontar crisis. Por ejemplo, Fujimori asumió la presidencia en medio de una situación de hiperinflación y con una insurgencia guerrillera creciente, de manera que cuando en 1992 justificó su golpe de Estado presidencial como un mal necesario, muchos peruanos le dieron la razón. El índice de aprobación de Fujimori ascendió meteóricamente a un 81 por ciento tras el golpe de Estado.⁹⁷

Otros dirigentes se inventan las crisis. Bajo la declaración de la ley marcial de Ferdinand Marcos en 1972 subyacía una historia de fondo: su «crisis» era en gran medida una invención. Plenamente consciente de que necesitaba justificar su plan para esquivar el límite de dos mandatos presidenciales que establecía la Constitución, Marcos decidió fabricar una «amenaza comunista».⁹⁸ Frente a apenas una docena de insurgentes verdaderos,⁹⁹ el presidente Marcos fomentó la histeria pública para justificar un estado de excepción.¹⁰⁰ Marcos quería declarar la ley marcial desde 1971, pero para vender su plan necesitaba un acto de violencia (un atentado terrorista) que desatara un temor generalizado.¹⁰¹ Y éste se produciría un año más tarde, con los bombardeos de Manila, que, en opinión de los agentes de inteligencia de Estados Unidos, fueron obra de las fuerzas gubernamentales,¹⁰² y con el intento de asesinato del ministro de Defensa, Enrile, que, tal como él mismo admitió posteriormente, fue «una farsa». De hecho, Enrile aseguró que «ni siquiera se encontraba cerca del lugar» donde supuestamente se produjo el supuesto atentado.¹⁰³

Sean o no reales las crisis, los autócratas en potencia están dispuestos a aprovecharlas con el fin de justificar sus golpes de Estado o tomas de poder. Quizá el caso más célebre sea la respuesta de Adolf Hitler al incendio del Reichstag del 27 de febrero de 1933, justo un mes después de haber jurado

el cargo de canciller. El debate sobre si fue un joven holandés con inclinaciones comunistas quien provocó el incendio en el edificio del Parlamento de Berlín o si lo ocasionaron las propias autoridades nazis sigue siendo tema de discusión entre historiadores.¹⁰⁴ Sea cual sea la realidad, Hitler, Hermann Göring y Joseph Goebbels llegaron al Reichstag en llamas y aprovecharon sin titubear tal suceso para justificar la aprobación de decretos de emergencia que desmantelaban las libertades civiles. Ello, en combinación con la Ley Habilitante del mes posterior, destruyó a la oposición y consolidó el poder nazi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Una crisis de seguridad también facilitó el giro autoritario de Vladímir Putin. En septiembre de 1999, poco después de que Putin fuera designado primer ministro, una serie de atentados con bomba en Moscú y otras ciudades, presuntamente perpetrados por terroristas chechenos, se cobraron cerca de trescientas víctimas mortales. Putin reaccionó desencadenando una guerra en Chechenia y adoptando medidas enérgicas a gran escala. Como en el caso de la Alemania nazi, existe cierto debate en torno a si aquellos atentados los cometieron terroristas chechenos o el servicio de inteligencia del propio Gobierno ruso.¹⁰⁵ Lo que sí está claro, en cambio, es que la popularidad política de Putin recibió un fuerte impulso con los atentados.¹⁰⁶ La población rusa cerró filas tras Putin y toleró, cuando no apoyó, los ataques contra la oposición en los meses y años subsiguientes.¹⁰⁷

En el pasado más reciente, el Gobierno de Erdogan en Turquía utilizó una crisis de seguridad para afianzarse en el poder. Después de que el AKP perdiera la mayoría parlamentaria en junio de 2015, una serie de atentados terroristas perpetrados por el ISIS permitieron a Erdogan usar el efecto de unirse bajo la bandera para convocar elecciones anticipadas y recuperar el control del Parlamento

al cabo de sólo cinco meses.¹⁰⁸ Pero el golpe de Estado fallido de julio de 2016 tuvo consecuencias aún mayores y proporcionó a Erdogan un argumento para adoptar medidas energéticas de amplio alcance. Erdogan respondió al golpe declarando un estado de excepción y lanzando una oleada masiva de represión que incluyó la purga de unos cien mil funcionarios públicos, la clausura de varios diarios y más de cincuenta mil arrestos, incluidos los de centenares de jueces y abogados, 144 periodistas e incluso dos miembros del Tribunal Constitucional.¹⁰⁹ Asimismo, Erdogan utilizó el intento de golpe de Estado como una oportunidad única para acaparar nuevos poderes ejecutivos. La toma de poder culminó con la aprobación en abril de 2017 de una enmienda constitucional que demolía los mecanismos de control de la autoridad presidencial.¹¹⁰

Para los demagogos acorralados por los límites constitucionales, una crisis representa una oportunidad de empezar a desmantelar los mecanismos de control incómodos y, en ocasiones, amenazantes inherentes a la política democrática. Las crisis permiten a los autócratas ampliar su margen de maniobra y protegerse de sus supuestos enemigos. Sin embargo, la pregunta que cabe formularse es: ¿realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas?